Universidad Nacional de Lanús
Maestría en Derechos Humanos

Cohorte 2016-2018

Diego Martín OLIVERA

TESIS DE MAESTRÍA

¡Más respeto que soy persona!

**“La construcción social y mediática del ‘otro’
delincuente”**

Directora de Tesis: Dra. Laura Gottero

9 de diciembre de 2019

INTRODUCCIÓN.....	3
CAPITULO 1. DERECHOS HUMANOS Y MEDIOS DE COMUNICACION	4
1.1. Concepto y características de los Derechos Humanos.	4
1.2. Derechos Humanos y medios de comunicación.	10
1.3. El derecho de Acceso a la Información y las diferentes instancias regionales, internacionales y nacionales de Derechos Humanos.	16
1.3.1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.	16
1.3.2. El Defensor del Pueblo de la Nación Argentina y el derecho a la información	17
1.3.3. El aporte de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.	18
1.3.3.1 Privilegiar el respeto de la persona humana y de sus garantías constitucionales.	20
1.3.3.2. Privilegiar un tratamiento contextualizado y respetuoso entre la criminalización de niñas, niños y adolescentes.	21
1.3.3.3. Privilegiar un tratamiento respetuoso, serio y contextualizado que evite la sexualización de las víctimas o victimario	21
1.3.3.4. Privilegiar un tratamiento respetuoso de la identidad, la intimidad y la privacidad de las personas implicadas.	22
1.3.3.5. Prescindir del uso y de la promoción de estereotipos y generalizaciones sobre los hechos, quienes estén implicados y sus allegados.	22
1.3.3.6. Utilizar una perspectiva no inculpativa en la construcción de la crónica policial.	24
1.3.3.7. Difundir la información constatada en fuentes fehacientes, en lugar de privilegiar la primicia como único criterio noticioso.	25
1.3.3.8. Procurar que el relato audiovisual respete y no interfiera en la investigación policial-judicial en curso.	26
1.3.3.9. Contextualizar los casos para no incurrir en la difusión de serializaciones forzadas y representaciones “fatalistas” y territoriales que propicien sentidos atemorizantes en las audiencias	26
1.3.3.10. Evitar la utilización de recursos y operaciones que tiendan a la espectacularización y ficcionalización de los casos y de las personas involucradas.....	27
CAPÍTULO 2. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y MEDIÁTICA DEL “OTRO” DIFERENTE, COMO OBJETO DE CRIMINALIZACIÓN.	29
2.1. El “otro” como objeto de castigo en el sensacionalismo mediático.	30
CAPITULO 3. SENSACIÓN DE INSEGURIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	47
3.1. El concepto de sensación de inseguridad en relación al delito.	47
3.2. La sensación de inseguridad y las encuestas de victimización.	50
3.3. La relación entre medios y sensación de inseguridad.	51
3.4. La irrupción mediática del miedo al delito en la vida cotidiana.	57
3.5. La naturalización mediática de la muerte del “otro” delincuente.	62
3.6. Los medios de comunicación y su influencia en el reclamo punitivo de la opinión pública.	64
4. CONCLUSIONES.....	66
BIBLIOGRAFÍA	72

INTRODUCCIÓN

Derechos Humanos y dignidad humana son conceptos inescindibles. Siendo una exigencia el respeto de la libertad, la igualdad de sexo, religión, pensamiento político y cualquier otra índole. Los Derechos Humanos son inherentes a todas las personas, y es por ello que delimitan el poder de un Estado; debido a que pivotan sobre valores tales como la libertad, la participación, la solidaridad, el acceso, la inclusión, la equidad y justicia siendo por tal motivo de carácter universal.

En tal sentido, los medios de comunicación social tienen una función preponderante en la construcción de identidades, y en muchos casos, conllevan a la estigmatización de determinados sectores de la sociedad. Tal circunstancia, ejerce una fuerte influencia en la opinión pública en tanto reproducen un relato basado en construcciones estereotipadas, estigmatizantes y discriminadoras.

De esta forma, el objetivo general del presente trabajo será demostrar como la producción de estos relatos incide negativamente en las garantías y el respeto de los Derechos Humanos de los sectores caracterizados. Relatos que se emiten, pretendiendo ampararse en la libertad de expresión, operan en detrimento a otros derechos que deben estar garantizados, como la igualdad, la no discriminación, el principio de inocencia y debido proceso.

Para ello, se analizará el tratamiento otorgado por la prensa gráfica argentina (principalmente los dos periódicos de mayor tirada) a la construcción del “otro” delincuente. Figura que, a la postre, tanto incidirá en la aplicación de políticas públicas punitivas como respuesta a la demanda de una parte de la sociedad, como en la incrementación de la dificultad de integración de dichos sectores como consecuencia del etiquetamiento al que fueron víctimas.

Otro objetivo planteado, es el de identificar en virtud de la relación existente entre pobreza/exclusión/desigualdad y criminalidad, en qué forma este tipo de manejo informativo favorece la existencia de una mayor cantidad de excluidos (y por ende mayores tasas de victimización).

Visibilizar las estigmatizantes formas comunicativas que en la sociedad argentina se han naturalizado, implica vislumbrar la necesidad de una imperante construcción de un modelo de comunicación que se centre en el respeto de la dignidad de las personas y de los Derechos Humanos.

CAPITULO 1. DERECHOS HUMANOS Y MEDIOS DE COMUNICACION

1.1. Concepto y características de los Derechos Humanos.

Dado que la tesis se refiere al vínculo de los Derechos Humanos, la delincuencia y los medios de comunicación, es importante realizar la definición de Derechos Humanos, y resaltar la importancia de los medios a la hora de bogar por su cumplimiento. Los derechos humanos según Quintana son:

“El conjunto de atributos propios de todos los seres humanos que salvaguardan, su existencia, su dignidad y sus potencialidades por el mero hecho de pertenecer a la especie humana, que deben ser integrados y garantizados por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para evitar que el poder público y la sociedad los vulneren o violenten, por tener la calidad de derecho fundamentales” (2009: 21).

Pero hablar de derechos humanos, implica también hablar de dignidad humana. En este sentido, y en palabras de Carpizo:

“El tema de los Derechos Humanos es recurrente en la historia de la humanidad, porque está estrechamente ligado con la dignidad humana, tuvo un gran impulso sobre ellos; pero es especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y en éstas últimas cuatro décadas cuando se convierten en una de las cuatro preocupaciones de las sociedades y cuando el tema se internacionaliza. Los horrores y la barbarie del racismo, y especialmente del nazismo, provocaron una reacción de indignación mundial. Con claridad se vio que este planeta tenía una alternativa. Vivir civilizadamente bajo regímenes democráticos y representativos, donde se respete la dignidad humana, para no caer en regímenes salvajes donde impere la ley del más fuerte y del gorila” (1993: 77).

Ruiz Jiménez reconoce elementos necesarios e inherentes que se concretan sobre las bases de la dignidad humana. En este sentido, define a los Derechos Humanos como:

“Exigencias básicas del ser humanos, en todos los tiempos, lugares y culturas que se van concretando en el curso histórico en derechos públicos subjetivos tanto individuales como sociales, que también tienen un punto en común al que todos se refieren, que es la necesidad de respetar la dignidad de la persona y de todos los valores que fluyen de esa dignidad que son

básicamente, la libertad, la igualdad y la solidaridad” (Ruiz Jiménez, 1984: 7).

En tanto que Eva Martínez Sampere refiere que son los denominados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948. En este contexto, la autora sostiene que la Declaración “dispone que toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (2007: 65).

Según el Manual elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas:

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas. Definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente el Estado. Delimitan el poder del Estado y, al mismo tiempo, exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos” (Naciones Unidas, 2016: 19).

La importancia de los Derechos Humanos, ha sido reconocida luego de la Segunda Guerra Mundial y son los principios en los que se sustentan todas las sociedades democráticas en donde se respeta el estado de derecho.

Otro autor como Juan José Prado, entiende que son: “determinadas situaciones favorables para el ser humano como tal, que se suponen derivadas de su “intrínseca dignidad” y que, por tanto, se reclaman como derechos fundamentales de cada hombre frente a todos los demás hombres y, de modo especial, frente al Estado y al poder” (1997: 19).

Pérez Luño los define como "un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional" (1979: 28). En este sentido, la dignidad, libertad e igualdad son los tres ejes fundamentales en torno a los cuales siempre se ha centrado la reivindicación de los Derechos Humanos. En cuanto a la igualdad humana, constituye el derecho humano más importante según el autor.

Ya desde el iusnaturalismo se sostenía que los Derechos Humanos corresponden al hombre desde su nacimiento y están integrados por todas aquellas garantías que necesita

el ser humano para "desarrollarse en la vida social como persona, esto es, ser dotado de racionalidad y de sentido" (*ibídem*), para disfrutar de una vida digna, que permita la satisfacción de las necesidades esenciales. Según esta postura los derechos de los seres humanos son superiores y anteriores a la actuación del Estado, lo que significa que no es necesaria una normativa jurídica, para la existencia de los mismos, y el Estado tampoco puede eliminarlos mediante la imposición de normas.

Otra definición, es la de Héctor Faúndez, quien sostiene que los Derechos Humanos pueden definirse como:

“Las prerrogativas que, conforme al Derecho Internacional, tiene todo individuo frente a los órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano, y cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual, o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado, para satisfacer sus necesidades básicas, y que reflejan las exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad de que forma parte” (1996: 21).

A su vez, Alfonso Dagron otorga un sentido bastante particular al concepto de Derechos Humanos:

“Los Derechos Humanos no son optativos. Los derechos humanos no son un regalo del poder. Los derechos humanos no son libertades sino también obligaciones y responsabilidades para vivir en sociedades más justas e incluyentes... Los derechos humanos abarcan la libertad, la participación, la solidaridad, el acceso, la inclusión, la equidad, la justicia y la interculturalidad” (2012: 1).

De esta manera, el autor señala la diferencia entre el ser humano y las otras especies, donde la especie humana es la única capaz de elegir consciente y libremente su identidad o su orientación ideológica, y ejercer su derecho de opinar (*Ibídem*). Un criterio relevante es el denominado positivismo jurídico, que fundamenta que las normas jurídicas deben explicarse por sí solas, sin buscar elementos que estén fuera de ellas, por tanto los Derechos Humanos son el producto de la acción normativa del Estado y sólo pueden ser reclamados cuando han sido consagrados en dichas normas.

"La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste, o bien tiene el deber

de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy conocemos como derechos humanos" (Nikken, 1994: 17).

Entre las consecuencias de que los Derechos Humanos sean inherentes se encuentran:

1) El Estado de Derecho: el ejercicio del poder debe sujetarse a ciertas reglas, las cuales deben comprender mecanismos para la protección y garantía de los Derechos Humanos (*Ibídem*, 22). El orden jurídico para la vigencia de los derechos humanos se corresponde con el Estado de Derecho como conjunto de normas e instituciones que regulan y limitan la acción de los poderes públicos (Fundación Juan Vives Suriá, 2010: 19). Agregado al concepto anterior, la Organización de las Naciones Unidas, define el estado de derecho como:

“Un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal” (A/68/213/Add.1).

El concepto de Estado de Derecho está incorporado en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y también fue motivo de celebración de la Asamblea General a través de su sexagésimo séptimo período de sesiones el 24 de septiembre de 2012, ocasión que concluyó con la aprobación por consenso de una Declaración en la que los Estados Miembros reafirmaron su compromiso con el estado de derecho. Dicha Declaración reconoce que:

“El Estado de Derecho se aplica a todos los Estados por igual y a las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas y sus órganos principales, y que el respeto y la promoción del estado de derecho y la

justicia deben guiar todas sus actividades y conferir previsibilidad y legitimidad a sus acciones” (*Ibídem*).

2) La Universalidad: Por ser inherentes a la condición humana, todas las personas son titulares de Derechos Humanos y no pueden involucrarse diferencias de regímenes políticos, sociales o culturales como pretexto para ofenderlos o menoscabarlos (Nikken, 1994). Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge aspiraciones comunes de dignidad de todos los pueblos y colectivos del mundo (Fundación Juan Vives Suriá, 2010: 19). Por otro lado, este principio se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de Derechos Humanos. La universalidad de los derechos humanos responde a la necesidad de una aplicación y protección efectiva para poder responder a las exigencias actuales de las personas como tal y como ciudadanos, cualquiera sea el lugar donde se encuentren. Agustina Ortiz Soriano, explica que:

“Estos derechos universales son expresión de la dignidad intrínseca de todo individuo, debiendo ser aceptados y respetados por todos los hombres y por los Estados, con independencia de su sistema ideológico, político, económico o social. Lo que se tiene que hacer es, buscar el reconocimiento universal de los derechos humanos, pero en el interior de la construcción de la autonomía política, no al interior de las construcciones culturales, sociales o morales del hombre” (2017: 24).

La autora, sostiene que la universalidad debe ser una característica inherente para evitar cualquier fisura por la que se cuele la exclusión (*Ibídem*). Desde otra perspectiva, Martínez Sampere defiende su universalidad argumentando su legitimidad como mínimo ético para toda la especie humana, tanto desde el punto de vista de la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos como de su contenido (2007).

En opinión de Elida Aponte Sánchez, “la universalidad es lo que da entidad a los Derechos Humanos. Sin ella, sin el atributo de la universalidad, nos podemos encontrar con derechos de las etnias, de entes colectivos más o menos numerosos, de grupos, pero no con derechos humanos” (2002: 28-29).

3) Transnacionalidad: Esta característica indica que la comunidad internacional tiene el poder de intervenir en situaciones en las que considere que un Estado está violando los Derechos Humanos en su territorio. Si son inherentes a la persona como tal, no dependen de la nacionalidad de ésta o del territorio: los porta en sí mismo (Nikken, 1994).

En este sentido, los Estados no pueden violar o impedir su protección dado a que están por encima del Estado y su soberanía. Es por ello, que deben cumplirse en cualquier parte del mundo, es lo que le da su carácter global. Este principio describe también la cooperación entre organizaciones de Derechos Humanos entre varios países.

4) Progresividad: Como la existencia de los Derechos Humanos no depende del reconocimiento de un Estado, siempre es posible extender el ámbito de la protección a derechos que anteriormente no gozaban de la misma (*Ibídem*). En este sentido, la codificación jurídica de los Derechos Humanos responde a un proceso histórico en la conquista de mejores condiciones para el ejercicio de la libertad y la dignidad en asociación con los adelantos tecnológicos y científicos (Fundación Juan Vives Suriá, 2010). El principio de progresividad, según Humberto Nogueira Alcalá:

“lleva a aplicar siempre la disposición más favorable a los derechos de las personas, por lo que siempre debe aplicarse aquél instrumento que en mejor forma garantice el derecho, no importando si la mayor garantía se encuentra en la norma interna del Estado o en la norma de derecho internacional de los derechos humanos incorporada al derecho interno, lo que lleva a una interpretación *pro-cives* o favor *libertatis*, o sea, a la interpretación que mejor favorezca y garantice los derechos humanos (2003: 71).

Esta progresividad de la que habla Nogueira Alcalá implica que un juez debe conocer y aplicar las normas del derecho internacional de derechos humanos incorporados al derecho interno, cuando las normas internas no garanticen tal derecho (*Ibídem*: 72).

Por su parte, Marie Picard de Orsini y Judith Useche indican que el principio que deben alcanzarse progresivamente quiere decir que:

“los gobiernos tienen la obligación inmediata de asegurar las condiciones que permitan gradual y constantemente la plena realización de éstos derechos, al ser los derechos humanos inherentes a la persona y su existencia no depende del reconocimiento de un Estado, siempre será posible extender el ámbito de la protección a derechos que anteriormente no gozaban de la misma” (2005: 431).

Las autoras remarcan la importancia de que los Derechos Humanos sean inherentes a la persona, no por el sólo hecho de estar establecido constitucionalmente, sino que por la

fuerza de la dignidad humana deben ser objeto de protección y garantía por parte del Estado (*Ibídem*).

Además, según Néstor Calvo: “el principio de progresividad tiene sustento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que éste contempla la obligación de los Estados Partes de lograr el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales” (2014: 144).

En palabras de José De La O Soto: “los derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza, para su aplicación e interpretación, deben ser desarrollados progresivamente a fin de extender su ámbito de protección” (2016: 123). En este contexto, el Estado debe generar y garantizar las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.

1.2. Derechos Humanos y medios de comunicación.

Los medios de comunicación tienen un importante aporte que hacer en la defensa de los Derechos Humanos, desde una perspectiva que trascienda la mera información y abarque funciones de sensibilización, denuncia y movilización. Ese rol tan importante que cumplen los medios de comunicación implica las decisiones respecto a qué hechos son los más relevantes para informar y desde qué perspectiva lo hacen. Son un motor importante en la formación de la opinión pública y contribuyen al respeto y vigencia de los Derechos Humanos.

A tal efecto, la forma en que los medios abordan situaciones de vulneración de derechos, la importancia que les brinde o el grado de ocultamiento, sumado a construcciones estereotipadas; son factores que incidirán en la garantía y el respeto hacia los Derechos Humanos. Dentro de este contexto, toda información que ofrezcan los medios de comunicación deben procurar el respeto a los Derechos Humanos de todas las personas de manera directa o indirecta, teniendo como premisa que todos son iguales en dignidad y derechos sin discriminación alguna por cuestiones de raza, color, posición económica, o cualquier otra condición.

Si bien el Derecho a la Libertad de Opinión, Expresión e Información fue reconocido en el art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 el cual expresa que: “Todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”; la interrelación entre los medios de comunicación y los diferentes

actores (gobiernos, fuerzas de seguridad, intereses privados, etc.), hace posible la inclusión de unos temas y la exclusión de otros, así como la primacía de unas fuentes sobre otras. Esta relación obedece a intereses y políticas editoriales, que definirán el tratamiento periodístico que cada medio de comunicación le otorgue a los Derechos Humanos. En este marco, la CIDH señala que:

“La libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras personas sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas las personas a conocer opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia (CIDH, Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001, párr. 66).

Entre los tratados que incluyen el derecho a la libertad de expresión se encuentran: “la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (González Pérez, 2015: 5).

Sin embargo, entre los tratados mencionados anteriormente, la CADH contempla garantías más amplias a la libertad de expresión (*Ibídem*). Esto implica que los Estados deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos cuando ocurran.

La libertad de expresión está estrechamente relacionada con los medios de comunicación. En este sentido, según Faúndez:

“Lo que hace la prensa es constituirse en un canal de comunicación para que distintos sectores sociales expresen públicamente sus aspiraciones, temores y esperanzas. No se puede ignorar que, en el mundo de hoy, es precisamente a través de los medios de comunicación como recibimos la mayor parte de la información” (2004: 214-215).

El derecho a la libertad de expresión es imprescindible para el ejercicio pleno de otros derechos fundamentales como: asociarse y reunirse con fines legales, y el derecho a peticionar ante las autoridades, entre otros. Y los medios de comunicación, en opinión de

Guerrero, “se presentan como aliados naturales de los ciudadanos para vigilar al poder y oponerse a los abusos de la autoridad, haciendo uso de la libertad de expresión para exponerlos” (2006: 17-18). Los medios informativos forjan la opinión pública y por ello, es indispensable que los trabajadores de la comunicación tengan garantizadas las condiciones adecuadas para realizar su trabajo. Y para esto, el Estado tiene la obligación de producir las condiciones necesarias a fin de permitir el ejercicio del derecho a comunicar de la mejor manera posible.

Respecto a la libertad de expresión, es un elemento fundamental para la democracia, y es un derecho universal que todo el mundo debe gozar y en él se incluye el derecho a mantener una opinión sin interferencias, buscando, recibiendo y difundiendo ideas a través de cualquier medio tal como lo establece la DUDH (UNESCO, 2019).

Así también, la CIDH considera que la libertad de expresión tiene una doble dimensión. En este sentido se sostiene que: “por un lado, significa que nadie debe ser arbitrariamente impedido o impedida de manifestar su propio pensamiento, lo que representa un derecho de cada persona. Pero, por otro lado, implica también un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno” (INDH, 2016: 7).

Por otra parte, la libertad de expresión tiene relación con otras garantías tales como, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. A su vez, otro derecho que emerge del ejercicio de la libertad de expresión es el principio de inocencia y debido proceso. Esto implica que no sólo los actores penales respeten éstos principios sino también que los medios de comunicación deban respetar el derecho de debido proceso de toda persona acusada de un delito y que sea considerada inocente hasta que se dicte sentencia al respecto y se demuestre lo contrario (*Ibídem*, 8-9).

De tal forma, los medios de comunicación son la fuente de materialización del ejercicio de la libertad de expresión y como tal, deben funcionar acorde a los requerimientos de esa libertad. Los medios de comunicación, entonces, aparecen como instrumentos de legitimación o condena ante la opinión pública de las prácticas vinculadas a los Derechos Humanos.

Algunos medios han tomado partido por la defensa de los Derechos Humanos, a través de la difusión de campañas y promociones que buscan dinamizar el flujo informativo y propiciar la creación de redes y alianzas estratégicas con la sociedad civil

organizada. Otros, se han inclinado por la denuncia, ejerciendo una labor de monitoreo y seguimiento de acontecimientos de grandes magnitudes. Es importante resaltar que otros instrumentos, luego de la Declaración Universal de Derechos Humanos, vinieron posteriormente a asumir el papel de la información y los medios de comunicación en favor de los Derechos Humanos, como la Declaración sobre la Supresión de las Formas que Supongan Discriminación, y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965, entre otros (Tuvilla, 1997).

En este contexto, la relación entre los medios de comunicación y los Derechos Humanos es total, y un ejemplo de ello son las noticias que tratan los temas o denuncias sobre violación de derechos humanos a través de entrevistas, reportajes y nota a personas comprometidas en la defensa de los Derechos Humanos.

Asimismo, la tecnología moderna en materia de información permite que podamos estar continuamente al tanto de las situaciones que suceden en nuestro país, provincia u otros lugares del mundo. Es por ello, que los medios de comunicación en todos sus niveles, (documentales, películas, noticias y demás plataformas) activan el sentido de conciencia de la sociedad respecto a la valoración positiva o negativa denunciando abusos, como así también promoviendo el respeto a vida humana.

Según Reguillo, “la relación entre derechos humanos y comunicación alude a una relación cultural, se trata fundamentalmente del debate entre la inclusión y la exclusión” (1998: 1). La autora sostiene que hay que realizar un trabajo de desmontaje de los dispositivos, discursos y mecanismos que naturalizan la exclusión y expropiación de la palabra a sectores marginados (*Ibídem*).

Teniendo en cuenta la estrecha relación entre medios y Derechos Humanos:

“si el lema que preside hoy nuestra institución es que *la comunicación es un derecho*, en los próximos años cabe esperar que entre todos seamos capaces de construir y proyectar otra comunicación para la dignidad y los Derechos Humanos de los pueblos latinoamericanos, liderando el proceso de cambio que vive la región, desde un enfoque crítico, en tanto que nodo central de mediación del pensamiento, la técnica y el saber comunicacional para el cambio histórico posible y necesario” (Caballero, Barragán, Gálvez, 2018: 15).

Los autores apuntan a la promoción de una comunicación revolucionaria en pos de los derechos fundamentales del ser humano. De tal forma, dejan de reconocer a la ciudadanía como ciudadanía de consumo o de masa, para reconocerla como ciudadanía activa. En cuanto a la comunicación, la misma debe ser un servicio público que incluya participación popular garantizada y concretada en derechos y al margen de los intereses del mercado (*Ibídem*, 114). Por otra parte, el Estado debe garantizar que ese servicio público sea garantizado.

Dagron sostiene que: “la comunicación articula todos los otros derechos, es esencialmente un proceso humano de relación, que implica no solamente intercambio de información, sino puesta en común de conocimientos y reconocimiento de las diferencias” (2012: 1). Por su parte, Marisa Rodríguez Abancéns habla de la cara positiva de los medios de comunicación, de sus ventajas, y de su impacto en la ciudadanía. Asimismo, la autora explica que nunca los medios fueron tan influyentes en la vida de las personas ya que vivimos en una sociedad “mediatizada” (2009: 236). Más aún, el derecho a la libertad de expresión es uno de los pilares más sólidos que sostienen el sistema democrático y es la primera herramienta para la protección de los Derechos Humanos. En este sentido, y con respecto a los medios la autora sostiene que:

“Los medios de comunicación, bien utilizados, son instrumentos privilegiados para la protección de los derechos humanos. Además de informar, forman, interpretan, analizan el presente, transmiten valores y pueden orientar la conciencia social y la acción política hacia el cumplimiento de objetivos humanitarios y altruistas” (*Ibídem*, 254).

Los medios son herramientas fundamentales para la construcción de la paz social y son necesarios para la defensa pública de los Derechos Humanos. Es importante el papel de la prensa ya que funciona como mediador entre los ciudadanos y el cumplimiento de sus derechos. El rol de los medios es crucial para descubrir asuntos de interés público en el cual se vean vulnerados. De esta manera, la forma en que los medios de comunicación aborden las afectaciones a los Derechos Humanos influirá en el respeto y la garantía de los mismos.

Abelardo Posso Serrano, sostiene que existe una abundante literatura sobre la relación incuestionable entre la difusión de los Derechos Humanos y los medios de comunicación. En palabras de Serrano:

“Esta vinculación con las libertades de opinión y de expresión, en materia de Derechos Humanos, de los medios de comunicación social en general da especial importancia a la libertad de las personas, como eje fundamental para la vigencia de los Derechos Humanos y de la Democracia, que señala que no debe ser solamente un conjunto de garantías institucionales, sino precisamente la libertad de los seres humanos para identificarse con una colectividad” (Posso Serrano, 2015).

Sin dudas, el medio de comunicación masivo por excelencia es la televisión la cual debido a su potencial tecnológico y satelital puede llegar en simultáneo a millones de personas y su información tiene la capacidad de ser asimilada por los televidentes formando parte de su imaginario cultural.

Por todo lo dicho, los medios de comunicación arman historias con un principio y final en el cual se asignan roles a sus protagonistas. En este punto, cuando se informa una noticia policial se limita a dar cuenta de la detención de una persona acusada de un delito, su proceso penal y sentencia final. De esta manera, las personas detenidas comúnmente son expuestas en los medios con una carga de culpabilidad previa a su sentencia vulnerando así, el principio de presunción de inocencia consecuencia de la construcción de una imagen en la que la persona detenida es culpable por el simple hecho de formalizarse una denuncia o investigación en su contra.

Por lo tanto, es importante fomentar un periodismo con enfoque de derechos humanos dejando a un lado el sensacionalismo en la cobertura de noticias relacionadas con la detención de personas para evitar los estigmas sociales de las mismas y los sectores marginados.

Desde este punto, cuando los medios de comunicación distribuyen estereotipos estigmatizadores en su relato, se produce un refuerzo de la exclusión social de los sectores empobrecidos apoyada en la imagen negativa que presentan las agencias informativas para las audiencias. Para evitar esto, se recomienda: “un periodismo con enfoque de derechos capaz de dimensionar el impacto que producen las estigmatizaciones o representaciones sociales negativas que se realizan en los medios respecto de las personas en situación de pobreza” (INDH, *ibídem*: 89). De esta manera, se trata de evitar la reproducción de estereotipos que vinculan el delito con la pobreza tratando a las personas como titulares de derechos en la noticia periodística.

1.3. El derecho de Acceso a la Información y las diferentes instancias regionales, internacionales y nacionales de Derechos Humanos.

1.3.1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El acceso a la información pública es parte constitutiva del derecho a la libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un libro titulado “El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano” publicado el 30 de diciembre de 2009. En este libro, se presenta en forma sistematizada los estándares en materia de acceso a la información del sistema interamericano de derechos humanos. El derecho de acceso a la información es muy relevante ya que es una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía.

En este sentido, el acceso a la información es una herramienta que se ajusta perfectamente a lo que se espera de los miembros de una sociedad democrática porque en sus manos, la información pública sirve para proteger derechos y prevenir abusos de parte del Estado.

La Organización de Estados Americanos ha reconocido que el derecho al acceso a la información pública constituye un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia en la cual los medios cumplen un papel fundamental en virtud de que operan:

“como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones. Los referidos medios, como instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan” (CIDH, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 2004, 117).

Con relación al párrafo anterior, además de la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el acceso a la información, los medios de comunicación también se ven obligados a asumir dicha responsabilidad ya que: “sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad” (CIDH, Opinión Consultiva 5/85 sobre la colegiación obligatoria de periodistas, 13 de noviembre de 1985).

El acceso a la información brinda poder a la sociedad civil y es útil para luchar contra males como la corrupción y el secretismo. Asimismo, es un instrumento para la

realización de otros derechos humanos porque permite conocer qué derechos se tienen y cómo defenderlos. Esto último, es particularmente urgente para los sectores sociales marginados o excluidos que no suelen tener a su disposición mecanismos de información sistemáticos y seguros que les permitan conocer el alcance de sus derechos y la forma de hacerlos efectivos.

Entre las características principales del derecho de acceso a la información se mencionan los principios como el de “máxima divulgación”, en virtud del cual la información en manos de órganos estatales es por definición pública; las excepciones a esta regla deben estar previstas en una ley, ser interpretadas restrictivamente, satisfacer objetivos legítimos y ser necesarias en una sociedad democrática. Y el principio de “buena fe”, en virtud del cual el Estado debe adoptar políticas activas tendientes a generar una cultura de transparencia, y responder a los pedidos de información de manera oportuna, completa y accesible (CIDH, 2019).

Por otro lado, la Corte Interamericana establece que: “toda persona, incluyendo a los familiares de las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas (o las víctimas), y la sociedad como un todo, deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones” (*Ibidem*, p. 21-22). En este sentido, cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos, la información que puede contener los archivos preservados y creados posee un valor fundamental para impulsar investigaciones sobre los hechos cometidos como también para evitar que otros hechos aberrantes vuelvan a repetirse.

En cuanto a la obligación que tienen los Estados, y siguiendo la lectura de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, éstos deben responder de manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes formuladas. Por otro lado, deben contar con un recurso que permita la satisfacción del derecho de acceso a la información como así también contar con un recurso judicial idóneo y efectivo para la revisión de las negativas de entrega de la información.

1.3.2. El Defensor del Pueblo de la Nación Argentina y el derecho a la información

El Defensor del Pueblo de la Nación es un órgano independiente que actúa con autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Asimismo, según el artículo 86 de la Constitución Nacional, el Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal,

es designado por el Congreso de la Nación y dura cinco años en su cargo y puede ser designado por una sola vez.

La Ley 27.275¹ y la Constitución Nacional garantizan el derecho de acceso a la Información Pública. Esta información podemos solicitarla a la Administración Pública Nacional, tanto sea administración central o descentralizada, a empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal, instituciones o fondos cuya administración esté a cargo del Estado nacional, entre otros.

El poder acceder a la información pública permite a un individuo conocer y evaluar el desempeño del gobierno, para así participar de manera informada en asuntos públicos e incidir en la toma de decisiones. Además, el acceso a la información permite mejorar la calidad de vida, ya que se construye un diálogo permanente entre gobierno y ciudadanos garantizando el ejercicio de derechos.

El Defensor del Pueblo de la Nación permite obtener información presentando una solicitud por escrito de manera personal o por correo ante dicho Organismo, o bien a través de medios electrónicos sin necesidad de mencionar el por qué de la solicitud de información. Además, el tiempo de respuesta no supera los treinta días hábiles.

1.3.3. El aporte de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Este organismo tiene la misión de promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el país (<https://defensadelpublico.gob.ar>). Asimismo, recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público en función de que sus derechos como receptores de medios sean respetados. En este sentido, la Defensoría del Público contribuye a la profundización de un nuevo mapa comunicacional desde el paradigma de Derechos Humanos y los valores democráticos.

Por otro lado, la Defensoría en conjunto con organismos de Derechos Humanos, movimientos sociales, periodistas y funcionarios del poder político, elaboró un documento que aporta algunos elementos centrales desde un paradigma comunicacional con perspectiva de Derechos Humanos a fin de identificar la complejidad y relevancia de este tema y brindar herramientas para el ejercicio responsable de una tarea clave para toda la sociedad.

¹ Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Publicada en el Boletín Oficial del 29-sep-2016.

Las temáticas que se abordan en el documento son las dificultades a la hora de denunciar, investigar y sancionar hechos de violencia institucional, sumado a la alta vulnerabilidad de las personas afectadas y la invisibilidad de este tipo de prácticas frente a la opinión pública y en los medios de comunicación. El acceso a la información puede prevenir la violación de derechos fundamentales por parte de las instituciones del Estado logrando también reducirlas (Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, 2016).

En este contexto, frente a un caso de violencia en el que participen agentes del sistema penal y de las fuerzas de seguridad, la Defensoría del Público recomienda en forma resumida: “Indagar sobre la veracidad de las primeras versiones disponibles, prestar especial atención a situaciones conflictivas en las que es recurrente el ejercicio de la violencia institucional; difundir las diferentes versiones del hecho, realizar esfuerzos para contrarrestar el ocultamiento o encubrimiento inherente a la violencia institucional; entender la información como mecanismo preventivo ante el mal desempeño de las fuerzas de seguridad y la impunidad; resguardar los derechos del público y reclamar la defensa y la protección de quienes trabajan en la comunicación (*Ibídem*).

Además, la Defensoría del Público ofrece una guía para el tratamiento periodístico responsable de noticias policiales. Dicho documento, surgió como un aporte al conjunto de necesidades tales como la relevancia que se le otorgan a las noticias policiales en los servicios de comunicación audiovisual, el peso que este tipo de noticias tiene en los noticieros y la magnitud que poseen este tipo de coberturas en relación a otros temas.

Esta propuesta atiende al gran número de denuncias recibidas por éste organismo por cuestiones relacionadas al morbo y el relato truculento con carácter invasivo con el cual son presentadas las noticias. De tal manera, se suma a los reclamos efectuados ante la Defensoría del Público, la espectacularización de la información relacionada a casos policiales lo que deviene en la selectividad temática policial que implica realizar un recorte que favorece la visibilización de ciertos delitos y el ocultamiento de otros.

Esta difusión en demasía de noticias policiales seleccionadas de un recorte particular comúnmente de delitos contra la propiedad o los delitos callejeros, naturalizaron el tan conocido concepto de “inseguridad”, y éste proceso de simplificación mediática del relato periodístico policial contribuye a un abordaje estereotipado y estigmatizante en la audiencia.

Además, esta simplificación de la noticia policial, reproduce prejuicios sociales como la criminalización de la pobreza, la demonización de los jóvenes, y la sobrerrepresentación del delito común, los cuales construyen socialmente la sospecha como forma de relación con el “otro” (Defensa del Público*, 2016: 7).

En este sentido, los grupos sociales enmarcados en la figura del “otro” a través del relato repetitivo de noticias policiales cuidadosamente seleccionadas, empuja a esos grupos a una marginalidad y discriminación cada vez mayor. Esta guía elaborada por la Defensoría del Público, pretende ser un instrumento útil para el campo periodístico a fin de contribuir a la promoción de una comunicación periodística distinta a la que imponen los monopolios de los medios, basada en el Derecho Humano a la comunicación. Las recomendaciones que ofrece la Defensoría del Público, son las siguientes:

1.3.3.1 Privilegiar el respeto de la persona humana y de sus garantías constitucionales.

La práctica periodística no debe lesionar los derechos humanos vigentes. Sin embargo, en el relato periodístico de noticias policiales, muchas veces se vulnera el principio de inocencia (*Ibídem*: 11). Es muy común que se promocióne una noticia policial cuya investigación no prospere o no se demuestre culpabilidad alguna. De esta manera, se busca no incriminar y/o acusar a personas sin saber si en realidad son o no culpables. En palabras de Luis Ferrajoli:

“La presunción de inocencia no solamente es una garantía de libertad y de verdad, sino además una garantía de seguridad o si se quiere de defensa social: de esa “seguridad” específica ofrecida por el Estado de Derecho y que se expresa en la confianza de los ciudadanos en la justicia; y de esa específica “defensa” que se ofrece a éstos frente al arbitrio punitivo” (2004: 549).

Por otro lado, es recomendable realizar abordajes respetuosos de la situación que atraviesan las víctimas, familiares y allegados; y se debe evitar entrevistar a alguien a la fuerza o exponer delante de las cámaras a personas conmocionadas o dolidas por el hecho sufrido (Guía para el tratamiento, 2016: 3-15).

Sumado a lo anterior, y citando a Omar Rincón: “Hay varios aspectos para tener en cuenta a la hora de informar: respeto a la dignidad humana, la compasión frente al dolor y la invulnerabilidad de la intimidad de las personas, el derecho a ser reconocido como inocente hasta que no se demuestre lo contrario” (2008: 80). De tal manera, el autor refiere que la

persona que comete un delito debe ser mencionado de acuerdo al calificativo penal que merezca: imputado, detenido, evitando utilizar adjetivos que promuevan discriminación.

1.3.3.2. Privilegiar un tratamiento contextualizado y respetuoso entre la criminalización de niñas, niños y adolescentes.

En muchos casos es posible identificar tendencias que criminalizan a los niños/as y adolescentes. En este sentido, dentro de esta modalidad algunos periodistas contextualizan el delito con las modas que usan los jóvenes describiendo su vestimenta, si usan gorrita, si tienen heridas de guerra, si son de hogares humildes, creando una relación intrínseca entre menores-pobreza-delito.

“La estigmatización de los jóvenes en conflicto con la ley en los medios de comunicación refuerza la vulnerabilidad de la adolescencia y juventud, y robustece el discurso político de “ley y orden” o de “mano dura” que se concreta en actitudes y leyes represivas que, en el peor de los casos, se convierten en acciones de “limpieza social” (POLJUVE, 2009: 15).

Para evitar situaciones que criminalicen a los jóvenes, se requiere entre otras cosas evitar el uso de expresiones que planteen el delito como característica de los menores. Por otro lado, se debe contextualizar los hechos que involucren menores como parte de una problemática más amplia (Defensoría del Público*, *ibídem*: 18).

Sin embargo, todavía persiste la doctrina de la minoridad en ciertos patrones ideológicos y por ello, luchar por los derechos de los chicos sigue siendo un desafío. Naddeo, afirma que:

“En forma cíclica, y en determinadas coyunturas políticas, cobra fuerza un tipo de discurso autoritario que, basado en una estrategia salvacionista contra la inseguridad, propone reformas al sistema penal a través de la baja de edad de imputabilidad de los jóvenes, a los cuales define como responsables de la violencia existente” (2007: 296).

1.3.3.3. Privilegiar un tratamiento respetuoso, serio y contextualizado que evite la sexualización de las víctimas o victimario

En muchos casos, las noticias policiales que involucran a mujeres muestran tendencias que ponen en riesgo el tratamiento responsable ya que se enfocan en las prácticas de la víctima, lo cual produce una revictimización a quien ha sufrido un crimen.

En este sentido, la Defensoría del Público recomienda entre otras cosas, evitar la reducción innecesaria de los análisis de casos policiales a la variable exclusiva de género. Por otro lado, evitar apreciaciones sexualizantes sobre víctimas mujeres que sugieran su responsabilidad en los casos de violencia sufridos (“Defensoría del Público”, *Ibídem*: 23).

En relación a lo anterior, Zúñiga, sostiene que los mensajes que ofrecen los medios de comunicación juegan con las premisas sobre la identidad femenina que establece el sistema patriarcal. Por otro lado, se basan en la polaridad y la dicotomía ideológica respecto de las mujeres ubicándolas en dos extremos opuestos: mujer-ángel ó mujer-demonio reforzando la idea de que las mujeres son madres, víctimas, sumisas, débiles y frágiles (2001).

1.3.3.4. Privilegiar un tratamiento respetuoso de la identidad, la intimidad y la privacidad de las personas implicadas.

Aquí, lo que está en juego es el respeto a los derechos personalísimos, su vida privada, su honor, su imagen, y su identidad (“Defensoría del Público”, *Ibídem*: 24). La vulnerabilidad de éstos derechos se hace visible cuando los medios de comunicación emiten noticias de casos policiales en los cuales no se respeta la privacidad del dolor de las víctimas, familiares o allegados; o cuando no se toman los recaudos necesarios para preservar la identidad y la intimidad de las personas implicadas en los hechos policiales.

La libertad de los medios de comunicación no es absoluta, en opinión de García San Miguel, la intimidad sería “el derecho a no ser conocidos, en ciertos aspectos, por los demás. Es un derecho al secreto, a que los demás no sepan lo que somos o lo que hacemos” (1992: 18).

Como recomendaciones para preservar el respeto a la identidad y privacidad de las personas involucradas en casos policiales mediáticos, es importante respetar la privacidad del dolor de las víctimas, evitar indagaciones y especulaciones, evaluar la difusión de imágenes de víctimas mortales o funerales sin el consentimiento de los familiares de la víctima (“Defensoría del Público”, *Ibídem*: 25-27).

1.3.3.5. Prescindir del uso y de la promoción de estereotipos y generalizaciones sobre los hechos, quienes estén implicados y sus allegados.

Kornblit y Adaszko afirman que “los estereotipos discriminatorios operan como modos de encasillamiento de grupos sociales a los que se percibe como diferentes, lo cual

limita las posibilidades de intercambio entre las personas, con el consiguiente estrechamiento de los horizontes vitales posibles” (2008: 110). Los autores, llegan a la conclusión que el pensamiento estereotipado y la conducta agresiva están relacionados. Y para prevenir la violencia derivada de los estereotipos, sugieren una intervención abocada al respeto de los Derechos Humanos desarrollando la tolerancia a partir del reconocimiento de la desigualdad de oportunidades propias y ajenas.

En este sentido, se deben evitar los aspectos específicos o detalles de las personas implicadas que no aporten a la construcción de noticias relevantes, ya que por el contrario, tienden a la estereotipación y discriminación que deviene en la vulneración de derechos de las personas implicadas. De este modo, se deberían evitar los señalamientos que puedan convertirse en estigmatizantes y discriminatorios (“Defensoría del Público”, *Ibídem*: 29).

Los medios de comunicación “poseen el poder de influir sobre la opinión pública hasta tal punto que se puede crear el estigma sobre los grupos en una sociedad” (Rubio Ferreres, 2009: 1). Asimismo, los medios de comunicación deben evitar destacar la nacionalidad de las personas imputadas de cometer delitos, o la instalación de apodos y calificativos negativos. El discurso sensacionalista de los medios, afirma la distancia entre un nosotros y los otros, enfatizando de esta manera, el estigma sobre los inmigrantes.

De tal forma, la audiencia siempre esperará encontrar algo sensacional sobre el otro en los medios informativos (Cartechini y Rivas, 2009). En este sentido, el rechazo a los extranjeros se basa en la reproducción de estereotipos sobre grupos sociales rechazados en virtud de su condición de ser diferentes de la cultura autóctona (Adaszco y Kornblit, 2008).

Por otro lado, es importante omitir eufemismos tales como “linchamientos”, “ajusticiamiento” o “justicia por mano propia”; como así también neologismos como por ejemplo: “narcotravestis” o “motochorros”. Otro dato importante, es evitar la representación de la sociedad entre ciudadanos y delincuentes donde el ciudadano común, está conformado por un “nosotros” amenazado por un “otro” al que se lo define como delincuente, motochorro, ladrón, etc.; que se sitúa en una jerarquía social inferior sin acceso a derechos (Defensoría del Público*, *Ibídem*: 30-31).

El proceso de estigmatización se da porque existe un conjunto de prejuicios previos que ponen en desventaja a determinados grupos sociales. En este sentido, Rodríguez Zepeda define el término prejuicio como: “una actitud de aversión u hostilidad hacia una persona

que pertenece a un grupo, simplemente porque pertenece a ese grupo, y se presume en consecuencia que posee cualidades objetables que se adscribe al grupo” (2006: 38).

En relación al párrafo anterior, la estigmatización se convierte luego en discriminación y ésta última, limita las oportunidades y derechos. De esta manera, y de acuerdo al Programa Especial para el Fomento de la Cultura Democrática:

“la discriminación se refiere a la construcción social de una relación de superioridad e inferioridad entre distintos grupos sociales o individuos. La discriminación siempre parte de la premisa de que el otro es inferior o poco apto y merece ser relegado, excluido y señalado como inferior” (Secretaría de Gobernación, 2001: 51).

1.3.3.6. Utilizar una perspectiva no incriminatoria en la construcción de la crónica policial.

La producción de la información periodística, muchas veces está sustentada en la ocurrencia mediática o en algún comentario ocasional sin fundamentos lo cual da lugar a especulaciones, prejuicios, e incriminaciones. En este sentido, se advierte que las valoraciones se basan en fuentes no confiables o inciertas y en apreciaciones personales. Estos patrones discursivos afectan los derechos de las personas acusadas, entre ellos, el principio de inocencia.

Los medios realizan un encuadre de la realidad asilando cierto material con enfoque en el objeto que quiere representar, remarcando algunos rasgos y excluyendo otros. Desde esta línea, Entman refiere que:

“encuadrar es seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida y hacerlos más destacados en el texto comunicativo, de tal manera que consigan promover una definición del problema particular, una interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para el asunto descrito” (1993: 52).

Para evitar este tipo de prácticas, la Defensoría del Público propone entre otras cosas, difundir información proveniente de fuentes concretas, comunicar las versiones de las distintas partes involucradas en el hecho, evaluar la difusión de información de la identidad de los presuntos implicados en la causa (Defensoría del Público*, *Ibídem*: 37).

De este modo, para la cobertura de noticias policiales Rincón sostiene que los medios de comunicación deben: “estudiar, analizar y lograr investigaciones e informes de fuentes estatales, información proactiva y no reactiva, consultar trabajos producidos por organismos internacionales, obtener una visión histórica frente a todos los problemas” (2008: 80).

1.3.3.7. Difundir la información constatada en fuentes fehacientes, en lugar de privilegiar la primicia como único criterio noticioso.

Los medios de comunicación deben contribuir al esclarecimiento de los hechos, y a la administración de justicia. Esto se logra mediante la difusión de información proveniente de fuentes confiables y previamente revisadas en lugar de privilegiar una primicia a través de fuentes imprecisas o poco confiables.

La comunicación requiere una investigación empírica y cuidadosa para evitar daños y consecuencias no deseadas. Al respecto, Bostrom explica que:

“Una comunicación pobre del riesgo puede causar más daño que los riesgos que se intentan controlar. Estos pueden llevar a decisiones equivocadas al omitir información clave o fracasar en contrarrestar las ideas erróneas. Pueden crear confusión al propiciar suposiciones equivocadas o enfatizar información irrelevante y generar un conflicto al erosionar la confianza de la audiencia en el comunicador. Pueden propiciar que los destinatarios estén mal informados, sean complacientes, o que tomen acciones inefectivas. En tanto las instituciones del comunicador sobre las percepciones de los destinatarios no pueden ser confiables, no existe sustituto para la validación empírica (1994: 796).

Muchas veces, las agencias informativas construyen un acontecimiento, una noticia policial donde el victimario y los motivos que dieron lugar a la comisión del crimen son desconocidos en un primer momento. Según Martini:

“Para reparar esta situación producto de una práctica deficiente, el cronista de policiales suele tener o buscar fuentes *off the record*, que pueden proporcionar datos falsos o al menos interesados en desviar la atención de la investigación periodística hacia otros motivos o personajes, o simplemente por desconocimiento que sin embargo no les impide hablar” (2009: 33).

Para ello, se recomienda: promover abordajes a partir de distintos enfoques, difundir los partes y hacerlos accesibles mediante un vocabulario específico. Por otra parte, evitar la utilización de redes sociales o información proveniente de aficionados y la exageración sin sustento en el anuncio de una primicia (Defensoría del Público*, *Ibídem*: 42).

1.3.3.8. Procurar que el relato audiovisual respete y no interfiera en la investigación policial-judicial en curso.

El trabajo periodístico y la labor judicial no corren al mismo tiempo y esto resulta imprescindible a la hora de elaborar el relato mediático, ya que la administración de justicia implica garantías procesales que forman parte del sustento de Estado de Derecho. La labor periodística no debe avasallar los tiempos judiciales para que no se produzcan actos injustos e irreparables (Defensoría del Público*, *Ibídem*: 43). En este sentido, es importante que los medios de comunicación no interfieran en la labor judicial evitando difundir pronósticos anticipados y detalles que tengan que ver con un hecho policial con el fin de no afectar derechos.

En este punto, es interesante el análisis que realiza Susana Morales respecto a los medios de comunicación y el sentimiento de inseguridad. La autora, refiere que existe una relación estrecha entre medios y sistema penal en la cual “los rasgos principales son la sustitución del conocimiento jurídico por editoriales y opiniones inexpertas con presunción de especialidad en materia penal” (2014: 119). Como consecuencia, las garantías procesales y la presunción de inocencia se verán alteradas (*Ibídem*).

1.3.3.9. Contextualizar los casos para no incurrir en la difusión de serializaciones forzadas y representaciones “fatalistas” y territoriales que propicien sentidos atemorizantes en las audiencias

Los hechos violentos que se convierten en noticias producen un alto impacto social. Ante ello, es importante generar una comunicación rigurosa y cuidada. Esto implica distinguir si se está frente a un delito o no, en caso afirmativo diferenciar si se trata de un delito contra la propiedad o contra la vida humana y no abordar como caso policial los hechos que tengan que ver con violencia de género, o enfrentamientos territoriales (Defensoría del Público*, *Ibídem*: 48).

Los medios de comunicación son un amplificador poderoso cuando se trata del delito, tienden a exagerar la frecuencia y gravedad de los hechos. Mark Warr, afirma al respecto que “en la cobertura de noticias sobre el delito, el énfasis se produce en el interés

noticioso” (2000: 198), y el elemento clave de dicho interés es la gravedad; cuanto más grave sea un delito, mayor la probabilidad de que se informe de él” (*Ibídem*). El autor sostiene que los medios ponen un extraordinario énfasis sobre el delito violento.

Para este punto es conveniente precisar el lugar del hecho, y las condiciones de la víctima y victimario; comunicar el estado de la causa; evitar el vínculo entre delito y la zona geográfica a fin de prevenir representaciones estigmatizantes del barrio y la gente del lugar; entre otras cuestiones (*Ibídem*: 51).

Según Sibrian, cuando el lenguaje mediático se entrecruza con el espacio se contribuye a “ordenar espacios, delimitar territorios y otorgar significados a los mismos, donde tal significado podría alcanzar a quienes los habitan y cuyo resultado puede ser una imagen de una sociedad específica” (2015: 97). De esta manera, la autora refiere que las investigaciones sobre el contenido mediático conducen al señalamiento de algunos sectores de la población como peligrosos o violentos convergiendo territorio y habitantes (*Ibídem*).

El trabajo de María Carman sobre la situación de los habitantes del asentamiento de Costanera Sur, sirve para mostrar cómo los discursos periodísticos utilizan herramientas para “deshumanizar” y estigmatizar a los pobladores de dicho asentamiento para su posterior represión. Por otra parte, explica que: “la operación simbólica de deshumanizar a los pobladores del asentamiento allana el camino para el ejercicio de la violencia pública” (2008: 13). El debate desemboca en preguntarse si la población del asentamiento es peligrosa o es peligroso su roce con los ricos. El hecho de excluirlos por su condición social da lugar a la práctica extorsiva o violenta por parte del Estado; es decir, exclusión y violencia están unidas.

1.3.3.10. Evitar la utilización de recursos y operaciones que tiendan a la espectacularización y ficcionalización de los casos y de las personas involucradas

Cuando un hecho policial es relatado de manera espectacular, la función informativa es relegada al desarrollo de las representaciones de los aspectos más sangrientos de cada caso en particular. De este modo, la muerte se exhibe en forma truculenta, se enfatiza el dramatismo, y se ofrecen imágenes y descripciones sobre hechos escalofriantes.

D’Adamo y García Beaudoux estudiaron la cobertura mediática de la violencia, el delito y la inseguridad en Argentina y su relación con la realidad de los hechos. Allí se analizan las variaciones en el tratamiento del delito en los periódicos, comparando el

“índice de violencia social percibida” con la evolución real del delito sobre la base de datos oficiales del Departamento de Justicia.

Estos investigadores llegaron a la conclusión de que:

“la cobertura mediática de la inseguridad y la violencia social no necesariamente refleja de modo preciso el delito real” y que los picos de cobertura de este tema se basan en *leading cases*, es decir, casos que facilitan una identificación de los lectores porque se sitúan “cerca de sus vidas, porque son historias que involucran a víctimas comunes y que están embebidas en un terrible dramatismo (2003: 11).

Por otro lado, tal como indica Schneider: “la criminalidad directamente vivida es en muchos aspectos tan distinta de los delitos descritos en los medios de comunicación de masas que, con frecuencia, la experiencia real con la criminalidad ni siquiera se percibe y reconoce como tal” (1988: 748).

Para evitar estas modalidades discursivas, es recomendable evitar titulares que utilicen imágenes impactantes con el objeto de obtener mayor *rating*, priorizando la producción de titulares que contengan información relevante del caso en particular. Evitar tácticas como el dramatismo del hecho, privilegiando el ejercicio de la función informativa y difusión de datos relevantes teniendo en cuenta los recaudos respecto del contenido de la noticia sobre todo cuando se está en horario apto para todo público (Defensoría del Público*, *Ibídem*: 2016: 58).

Esta guía, surgió a partir de la reflexión de periodistas y productores sobre los reclamos de las audiencias y sobre la perspectiva que tiene la Defensoría del Público ante cada caso mencionado con el fin de posibilitar debates y abordajes alternativos para que la actividad profesional en material policial no vulnere derechos.

CAPÍTULO 2. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y MEDIÁTICA DEL “OTRO” DIFERENTE, COMO OBJETO DE CRIMINALIZACIÓN.

La política criminal, moldeada por las demandas culturales y sociales, muchas veces lleva a un cierto sector de la sociedad a materializar a través de la justicia el castigo hacia un sujeto denominado “otro” delincuente en virtud de una construcción elaborada por los medios de comunicación y la opinión pública. En este sentido, Gustavo Beade habla de lo que denomina “populismo penal” (2010). Con ésta expresión el autor hace referencia a una corriente que emerge de algún sector de la sociedad con el objeto de pretender imponer determinada política criminal; sea en virtud de un reclamo sobre un delito concreto o de una mayor demanda de seguridad. De esta manera, este descontento que se generaliza entre los integrantes de ésta corriente, es rápidamente amplificada por los medios de comunicación y utilizado por los políticos para campañas futuras (*Ibídem*).

Sin embargo, el análisis del castigo responde a contemplar los patrones de expresión cultural y la lógica del interés material o control social. De este modo, el castigo se lleva a cabo desde la órbita física (detención, torturas, malos tratos) hasta la moral o psicológica (discriminación, exclusión), de manera que no solamente se ejecuta la acción penal sobre un sujeto estigmatizado o señalado como “otro” sino que además se ejerce un daño moral respecto a un determinado sector de la sociedad que encuadra en la figura criminal construida socialmente.

Michel Foucault en su obra *Vigilar y castigar* ofrece una reflexión sobre el delito y su asociación a una determinada clase social. Según el autor:

“El crimen no es una virtualidad que el interés o las pasiones hayan inscrito en el corazón de todos los hombres, sino la obra casi exclusiva de determinada clase social; que los criminales, que en otro tiempo se encontraban en todas las clases sociales, salen ahora casi todos, de la última fila del orden social” (1975: 280-281).

Dentro de este contexto, considera que sería hipócrita pensar que la ley se ha hecho para todos iguales. Sería más prudente reconocer que se hizo para algunos y que recae sobre otros, dirigiéndose principalmente a las clases más numerosas y vulnerables (*Ibídem*).

2.1. El “otro” como objeto de castigo en el sensacionalismo mediático.

El sensacionalismo discursivo que producen los medios de comunicación, muestra el rumbo que todos son propensos o candidatos a sufrir un hecho delictivo violento, el cual dejará en claro la crueldad con la que actuará el victimario y la manera *escalofriante* en la que la/s víctima/s sufrirán. Su mensaje se encuentra en la forma de relatar y la carga informativa (en lo posible, sangrienta), pasando el límite del respeto y el dolor de las víctimas o de sus familiares.

Otra función del sensacionalismo, es la de encuadrar al victimario como *bestia*, o *monstruo*, a fin de que su impacto en el público sea mayor; y de ésta manera se aliente al reclamo de medidas punitivas a la brevedad (Martini, 2009). En este sentido “se puede pensar que el público responde con la aceptación (acostumbramiento) al horror, con el miedo y la ausencia de tranquilidad a la reiteración, y con la discriminación del ‘otro’ no conocido que por fin, se constituye en sospechoso” (*Ibídem*: 39).

En cuanto a la relación entre inseguridad delictiva y medios de comunicación, Rincón sostiene que se habla del tema como algo cotidiano; se tiene la sensación de vivir en una escena del crimen constante y por eso, la sociedad se siente amenazada y vulnerable. Esto, refiere el autor “contribuye a que se comience a imaginar quién y cómo es ese ‘otro’ que es el delincuente” (2008: 74). De este modo, construimos el “otro” delincuente con un perfil bastante conocido: pibe chorro villero, mal vestido, pobre, de gorrita, entre otras cosas. En esto el periodismo tiene mucho que ver, como también tiene vital influencia en el aliento al reclamo de medidas represivas para aquellos “otros” desviados; contruidos socialmente. La noticia policial surge como algo de lo que todos podemos opinar y nos da lugar a la participación en la vida social. Por eso, la vida policial es muy productiva para el periodismo.

Con respecto a la relación entre la opinión pública, medios y seguridad, Rey señala que: “sobre los temas de seguridad hay una notable falta de análisis, y una ausencia de densidad en la discusión de las causas o en la evaluación de las consecuencias” (2008: 93). Como la memoria de la opinión pública sobre hechos de seguridad está hecha a corto plazo, los hechos impactan un tiempo y luego desaparecen; y esto tiene que ver con las estrategias de suspenso que utilizan los medios de comunicación. Así también, “las estigmatizaciones no son infrecuentes en las representaciones sobre la seguridad-inseguridad que componen la opinión pública. Como no lo es el señalamiento de los jóvenes especialmente pobres, como criminales potenciales” (*Ibídem*: 96).

Una vertiente importante en la relación de los medios y la seguridad, es la exploración sobre la construcción social del miedo. En este sentido, la problemática respecto a la inseguridad ha sido el origen de temores en varias ciudades del mundo. Y esto se ve reforzado por la incorporación de estadísticas en las noticias que tratan de mostrar los incrementos de los delitos, situación que agrava la percepción de inseguridad en la sociedad.

Asimismo, la muerte de un delincuente no hace diferencia en el tipo de tratamiento que se da a la noticia, se invisibiliza y naturaliza. En este sentido, para los diarios Clarín y Crónica la noticia respecto de un delincuente abatido no ingresa en la portada principal de sus ejemplares (Calzado, 2009). Como factor agregado al fallecimiento de un delincuente en razón de un enfrentamiento con la policía, se suma el etiquetamiento exitoso del adjetivo *delincuente*.

Por otra parte, la muerte remite a una lógica de la inseguridad que se vive en un contexto de miedo, y por dicho motivo se produce su silencio. En este marco, cuando la etiqueta de delincuente para quien perdió la vida no calza perfectamente, surge el espacio para que la misma sea problematizada. Cuando entra la duda, si la persona que murió podría no resultar un delincuente, se utilizan frases como: “*según informan..., sospechoso...*” (Calzado, 2009) sin dejar de lado que podría tratarse de un delincuente. Con relación a este punto, la autora agrega lo siguiente: “la invisibilidad de los muertos por la policía pasa a depender del proceso de etiquetamiento: la persona que (además) es delincuente es invisibilizada y es visibilizada solamente en clave de delincuente” (*Ibidem*: 89). Tanto Clarín como Crónica, trabajan en esa construcción del *otro*. Clarín, nombra al delincuente como: “*ladrón, asaltante, malandra, joven, etc.*” Por su parte, Crónica, los tilda de: “*malvivientes, pandilleros, hampones, etc.*” (*Ibidem*).

Sin embargo, lo que tienen en común los dos Diarios es que nunca dan nombre ni apellido de los delincuentes muertos, por lo que tienden a despersonalizarlos en el discurso, dejándolos sólo con esa etiqueta. Los periodistas utilizan esta estigmatización para darle invisibilidad y naturalización a las muertes de delincuentes.

Otra lógica utilizada por la prensa es la escala jerárquica de las muertes. Esto proviene de la diferenciación entre la muerte de un delincuente y de alguien que parece no haberlo sido. En este caso, los medios siempre pondrán énfasis en las características de la

persona muerta, ya que sus características personales son las que marcarán la posición en la escala jerárquica de las muertes.

Dicho en otras palabras, la muerte sólo se visibilizará cuando el muerto por la policía demuestre inocencia, lo que la hará digna de ser llamada “víctima”. Así se llegará a una determinación si la muerte fue errónea o causa de un gatillo fácil (*Ibídem*). De esta manera se observan claramente los modos de construcción de noticias policiales que dan cuenta de la muerte de delincuentes en enfrentamientos con la policía.

En el Art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, y a la seguridad de su persona”. Cuando los medios de comunicación legitiman la muerte del “otro” señalado como delincuente, o al ignorar sus derechos, se contribuye a violar la seguridad que todos los ciudadanos deben tener independientemente de su condición para garantizar su vida y que sea respetada. Y es que para el Art. 7: “Todos son iguales ante la Ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. Que los medios de comunicación no contemplen esto a la hora de la muerte de una persona, sea cual sea su condición, sea o no un “otro” delincuente, es incumplir con esta proclamación.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el Diario Clarín difundió una noticia policial con fecha 23 de septiembre de 2018 bajo el título: “Retiro. Cuáles son los grupos narco que se disputan el poder en las villas 31 y 31 bis”.

En esta oportunidad, se estigmatiza a un barrio y a la población extranjera. En este sentido, se habla de quienes se disputan el negocio del narcotráfico en las villas 31 y 31 bis. Así, en el primer subtítulo que Clarín le otorga a esta nota, refiere que: “Están los herederos de los *peruanos* “El Loco César” y “Ruti”, más los *paraguayos* de “Los Sampedrinos”.

Sumado a la etiqueta de inmigrante-peligroso, la nota muestra un mapa de la droga dentro de la villa 31, donde en el punto “B” se toma como referencia el sector de la banda de Los Sampedrinos “Paraguayos dedicados al comercio de la marihuana”. Seguidamente, en el punto “C” del mapa en cuestión, se señala la zona de la banda del “Loco Cesar”, *peruanos* dedicados al comercio de la cocaína.

Es reiterativa la forma en que Clarín reproduce los discursos mediáticos policiales respecto a la población extranjera basada en prejuicios discriminatorios sobre las minorías y los barrios marginados. Respecto a la zona geográfica del delito, Clarín visibiliza un territorio en el cual sus habitantes se dedican al tráfico de drogas y a cometer crímenes vinculando a los extranjeros con pobreza y delincuencia, construyendo y sosteniendo esa asociación.

De esta forma, el discurso contribuye a ordenar espacios, delimitar territorios y darles significados. Pero estos significados pueden involucrar a los habitantes del territorio cuyo resultado luego podría ser el de una sociedad específica. En relación a este punto, Foucault sostiene que cuando el lenguaje se entrecruza con el espacio, el decir elabora un cuadro que “permite al pensamiento llevar a cabo un ordenamiento de los seres, una repartición en clases, un agrupamiento nominal por el cual se designan sus semejanzas y sus diferencias” (2008: 11).

Este planteo, se puede asociar al señalamiento y percepción del “otro” como peligroso y violento que el discurso mediático le otorga a ciertos sectores de la población construyendo estigmas como mecanismos de clasificación en donde se dividen normales de anormales. En palabras de Sibrian:

“Cuando la información clasifica algunos referentes como peligrosos y violentos, mediante atributos desacreditables o asociaciones que promueven la desacreditación, se puede contribuir a un recorte de la realidad que visibiliza y señala a sólo un tipo de violencia y sólo a un sector o clase social como violento, perdiendo así la correspondencia entre la acción real, su contexto y vinculación, y la información sobre tales hechos. Con ello, se colabora a reafirmar sistemas de pensamientos que a priori contienen clasificaciones diferenciadas como barrio-bajo/violencia y barrio-alto/seguridad” (2015: 101).

Asimismo, Cornejo explica que la configuración de estigmas territoriales implica la construcción de “identidades deterioradas de carácter colectivo que se imponen sobre ciertos barrios de la ciudad, considerados reductos de delincuencia y pobreza” (2012: 177).

A continuación, y con fecha 25 de marzo de 2019, Clarín publicó una nota cuyo título fue: “Operación Wi-Fi, Cayó la mayor banda narco del sur porteño con una

tonelada de marihuana” donde se menciona la detención de una banda integrada por un argentino, y tres paraguayos dedicadas al narcotráfico en la Villa Zavaleta y la Villa 1-11-14 que utilizaban como fachada un local de Internet. El procedimiento fue llevado a cabo por la Policía de la Ciudad en la localidad bonaerense de Tristán Suárez.

Mas allá de que se trate de un delito grave como lo es el narcotráfico, se vuelve a hacer énfasis en la nacionalidad de los integrantes de la banda, colocándolos en una categoría social inferior a la que hay que castigar. Los medios de comunicación denotan una representación de la inmigración en términos de estigmas de clases. De acuerdo con Goffman:

“Son bien conocidas las actitudes que nosotros, los normales adoptamos hacia una persona que posee un estigma, y las medidas que tomamos respecto a ella, ya que son precisamente estas respuestas las que la benevolente acción social intenta suavizar y mejorar. Creemos, por definición, desde luego, que la persona que tiene un estigma no es totalmente humana (...) Construimos una teoría del estigma, una ideología para explicar su inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esa persona, racionalizando a veces una animosidad que se basa en otras diferencias, como por ejemplo, la de la clase social” (1963: 15).

Dentro de este marco, la imagen que tenemos del “otro” inmigrante concuerda en gran medida con la representación que los medios de comunicación producen en relación al inmigrante. Al respecto, sostiene Gálvez que:

“...por lo general el encuadre (textual o visual) de la inmigración que presentan los medios de comunicación suele descubrir aquellos rasgos que permiten identificar al inmigrante como tal. En el caso de las imágenes podemos apreciar que siempre suele haber alguna característica – generalmente fenotípica o de carácter étnico- que hace visible al inmigrante (rasgos faciales, color de la piel, vestimenta, etc.). Así, lo habitual en los medios es sacar al inmigrante que cualquier persona identificaría a primera vista como tal, lo que nos permite identificar la noticia al instante” (2009: 68).

El problema, refiere el autor, radica en el encuadre de carácter negativo problemático que los medios de comunicación le otorgan a la inmigración. A tal efecto,

Clarín menciona en uno de sus párrafos: “El personal de la fuerza siguió al auto y luego de unas cuadras le cortó el paso. Los policías requisaron el vehículo y encontraron nueve ladrillos de marihuana de un kilo cada uno dentro de la mochila. Su conductor, *paraguayo* de 50 años, quedó inmediatamente detenido”.

No obstante, en el párrafo siguiente también se menciona la detención de dos personas más de nacionalidad *paraguaya*. De esta manera, se percibe un cierto rechazo al extranjero en el relato periodístico de Clarín con énfasis en la discriminación hacia un “otro” inferior cuya representación mediática indica que el inmigrante viene de afuera para cometer delitos.

Otro ejemplo de Clarín lo podemos encontrar en el artículo publicado el 16 de junio de 2019, titulado “La enviaron a Lima, Perú. Echaron del país a la madre de un clan narco de la Villa 31”.

Esta redacción, vuelve a poner foco en la nacionalidad de la implicada, en este caso se trata de la deportación de una mujer de nacionalidad peruana, acusada de ser la “madre de un clan narco peruano de la Villa 31”. Por otro lado, se vuelve a repetir la estigmatización respecto al territorio donde “opera la banda narco” (la Villa 31), colocando el espacio y sus habitantes dentro de un submundo del delito.

Así, sistemáticamente se pone énfasis en los extranjeros como parte inherente de la delincuencia. En este sentido, Clarín dice: “Según fuentes oficiales, la fuerza de seguridad también colaboró desde principios de año con la expulsión de otros 15 extranjeros involucrados en distintos delitos: dos *uruguayos*, dos *bolivianos*, dos *paraguayos*, un *venezolano* y un *dominicano*”. Nuevamente, se observa un discurso que conduce a la construcción del sujeto migrante como un problema, asociando a su vez, pobreza, migración y delito.

En esta construcción, se concibe la imagen del “otro” como un extraño y peligroso al cual hay que excluir. De esta manera, en otro párrafo del artículo, el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y Vice Jefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, expresa lo siguiente “Estas personas vinieron al país no para trabajar sino para delinquir, han roto el contrato social básico por lo cual los queremos afuera. La Argentina es un país forjado por los inmigrantes pero aquellos que vienen al país a cometer delitos cuando los detengamos vamos a hacer lo posible para que se vayan del país y no vuelvan”, afirmó.

Estas prácticas discursivas sobre el inmigrante funcionan como barreras a la inclusión social, por lo que los extranjeros son considerados en el relato policial como individuos de segunda categoría social, los cuales carecen de derechos. En palabras de Ariel Sar: “En consecuencia, la presencia del extranjero es presentada por los medios de comunicación como un problema en que se destaca todo lo que puede ser juzgado como negativo de manera reiterada y se omiten todos los aportes que realiza a la sociedad local a la que llegó para convivir” (2015: 32).

En este sentido, el autor sostiene que la correlación entre inmigración y delito es puesta en circulación por la dirigencia política y repetida hasta el cansancio por el discurso de los medios de comunicación (*Ibídem*).

Por otro lado, con fecha 20 de julio de 2019, el mismo Diario publicó un artículo titulado “Desbarataron una banda narco que operaba en la Villa 31”, donde da cuenta de la detención efectuada por la Policía de la Ciudad de 18 personas acusadas de formar parte de la banda “Los Sampedranos”. En este sentido, el primer punto que llama la atención es la estigmatización y discriminación que se ve en el primer párrafo el cual describe lo siguiente: “una asociación ilícita de ciudadanos paraguayos que se dedicaba al narcomenudeo y que tenía como base de operaciones en la Villa 31 de Retiro”.

De tal forma, y remitiéndonos a Goffman, un estigma es “una clase de relación entre atributo y estereotipo” (2008: 16). Pero ese atributo del cual habla el autor, es totalmente desacreditador. En ese sentido, explica que el estigma determina quienes quedan dentro de la categoría de normales y quienes no. Si tenemos en cuenta el contenido de la noticia, notamos dos cuestiones estigmatizantes. La primera, tiene que ver con el espacio territorial (Villa 31) tratando de construir e instalar un discurso sobre la peligrosidad del barrio pobre y de sus habitantes.

Es lo que Wacquant denomina “estigma territorial”, el cual es similar al estigma corporal y “puede ser transmitido por vía del linaje y contagiar por igual a todos los miembros de la familia” (2009: 17). De esta manera, el autor sostiene que los territorios se dividen en “infiernos y territorios pacíficos” (*Ibídem*). Así, Clarín atribuye culpabilidades a personas vinculando delitos con el espacio territorial de manera prejuiciosa.

Bajo este discurso, la noticia delimita un espacio al cual le otorga un significado a quienes lo habitan designándole a los barrios de clases empobrecidas una valoración negativa generando en el lector una sensación de inseguridad basada en el discurso

mediático que describe a “unos” como personas de bien y “otros” que integran las clases bajas o marginadas, como peligrosos. Este recorte que visibilizan los medios acerca de un sector o clase social como peligrosa, colabora en la reafirmación de pensamientos respecto a las clasificaciones entre barrio pobre-delincuencia, y barrio alto-seguridad.

La segunda cuestión importante en ésta noticia, es el uso de estereotipos discriminatorios respecto a los extranjeros tal como se lee en otro de sus párrafos: “Los procedimientos se efectuaron durante la mañana de este sábado en distintos puntos de la villa, dando como resultado la detención de 16 ciudadanos paraguayos y dos argentinos, entre ellas los dos principales cabecillas de la organización ilícita”. Se hace mención a la nacionalidad de los implicados en la causa con el fin de construir identidades y la percepción del “otro” extranjero como chivo expiatorio y causa de todos los males.

La carga estigmatizante que producen los medios, y en este caso Clarín, es significativamente fuerte respecto de los extranjeros y en su mayoría en relación a los inmigrantes paraguayos, bolivianos, peruanos y colombianos. En este sentido, cuando un estereotipo cobra una alta carga negativa en la sociedad respecto a un sector en particular, se produce el estigma (Goffman, 1963).

Esta carga negativa está compuesta de etiquetas y creencias culturales que producen discriminación y desigualdad separando a un Nosotros de Ellos (Link y Phelan, 2001). Este discurso estereotipado de Clarín respecto a la imputación de personas extranjeras de cometer delitos, produce en ciertos sectores de la opinión pública comportamientos agresivos, tratamientos injustos hacia la población inmigrante y xenofobia a través de la repetición y selección de temas y sectores sociales.

Asimismo, el 9 de octubre de 2019, el mismo periódico publicó un artículo titulado “Operación Bachata. Acusados de narcos, los dominicanos se defienden: el Trap de la cárcel y un maletín con dólares de utilería”.

Esta publicación de Clarín, tiene tintes estereotipados ya que, se trata de la detención de una familia de origen “dominicano”, acusada de integrar una banda de narcotraficantes. Lo primero que muestra el carácter estigmatizante de la nota es el título: “Operación Bachata”, dejando en claro que se trata de una noticia policial donde los acusados son de procedencia dominicana por el ritmo musical al que hace referencia, marcando una diferencia entre lo de afuera y lo autóctono. De este modo, se busca

reproducir un discurso discriminatorio en función de preservar la posición privilegiada de los ciudadanos nacionales (Montera, 2009).

En este sentido, el autor sostiene que los medios de comunicación ejercen una influencia directa e inmediata sobre sus audiencias de modo tal que se podría sostener la existencia de una relación causal entre contenido mediático y comportamiento humano (*Ibídem*). Esta noticia, contiene un tinte racista que se nutre mediante los prejuicios e ideologías culturales que utiliza el medio gráfico a través de su discurso. Esto se refleja en uno de los párrafos de la nota: “Los tres cayeron en el marco de un operativo bautizado "Bachata" por el origen dominicano del clan”.

Por otro lado, en una parte de la noticia se dice que la familia dominicana acusada, además de vender droga, falsificaba dólares. Esto fue sostenido por la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich. Pero esto último, fue cuestionado por la defensa de la familia ya que el maletín que secuestró la Policía, tal como lo mostró Bullrich, es en realidad el mismo que la familia detenida utilizó en un video musical que realizó en el Penal de Marcos Paz para ridiculizar el procedimiento, según ellos fraguado por parte de la Policía. Estas prácticas de detenciones sin medios de prueba fehacientes, dan la pauta de cómo las políticas públicas de seguridad utilizan muchas veces al inmigrante, como un factor desencadenante del delito. En tanto que para fomentar esa percepción, resulta necesario que sean mostrados a la sociedad con nombre, apellido y nacionalidad.

Esta estigmatización mediática respecto de los extranjeros, produce desigualdad social y económica que deviene en la explotación de minorías. En palabras de Wieviorka:

“Es claro que la segregación va asociada preferentemente a procesos de diferenciación, mientras que la discriminación se asocia a relaciones de desigualdad. En algunos casos, el prejuicio anuncia la violencia, la prepara o la acompaña; en otro la violencia queda excluida: a veces el racismo parece proceder de una relación directa de dominación del grupo racista sobre el grupo racializado, mientras que en otras ocasiones el grupo racializado es una construcción en gran parte mítica” (1992: 175).

Las prácticas racistas en el discurso mediático de la delincuencia benefician a un grupo en detrimento de otro, y esto justifica el sistema de dominación que trae consecuencias tales como se dijo anteriormente, de desigualdad social y económica como así también, de violencia.

Siguiendo con los ejemplos, en esta oportunidad nos vamos a centrar en la postura del Diario Crónica a la hora de informar hechos policiales. En este sentido, se comenzará mencionando una noticia publicada el día 21 de febrero de 2019 cuyo título es: “Cayó banda de colombianos por vender “coca” en una mueblería”.

Este artículo hace referencia a la detención de tres personas de nacionalidad colombiana acusados de distribuir droga mediante la actividad de delivery en la zona de Quilmes. En este caso, otra vez se hace mención de la nacionalidad de los imputados, criminalizándolos desde esa condición. A tal efecto, uno de sus párrafos dice lo siguiente: “Tres ciudadanos colombianos fueron detenidos este jueves en el partido bonaerense de Quilmes acusados de vender cocaína en una fábrica de muebles que utilizaban como fachada, y de entregas de drogas bajo la modalidad “delivery”.

El hecho de mencionar la nacionalidad de la persona detenida, opera como dispositivo de afirmación sobre el origen de la misma para remarcar la diferencia entre quienes pertenecen a la nación (ciudadanos nacionales) y los “otros”, inmigrantes o extranjeros. Este mecanismo ejercido por los medios de comunicación instala en la sociedad la discriminación y xenofobia, y son responsables de la propagación de prejuicios, estereotipos y discursos discriminatorios hacia la población extranjera.

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales: “Lo más peligroso no solamente es la construcción del estereotipo, sino que después de éstas declaraciones se cristalicen cambios en las prácticas de las autoridades, en la institucionalidad estatal o incluso en modificaciones de la normativa vigente que limiten los derechos de las personas migrantes” (CELS, 2016: 16).

Por otro lado, el relato discriminatorio, como así también la construcción de imágenes estereotipadas respecto a la información de noticias policiales donde resulten implicadas personas extranjeras, forman parte de los mecanismos de exclusión social y afectan el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de dichas personas (*Ibídem*).

Asimismo, y con fecha 9 de junio de 2019, otro artículo publicado por el Diario Crónica refiere lo siguiente: “Colombiano motochorro fue detenido en Recoleta por robo a dos mujeres”.

La publicación da cuenta de la detención de una persona de origen colombiano que cometió un delito en el barrio de Recoleta. Así también, se agrega que el detenido tenía pedido de captura vigente por robo. Aquí, encontramos una serie de prejuicios y

estereotipos sobre la persona detenida que devienen en discriminación hacia quien proviene de “afuera”.

Esta noticia, habla de la detención de un delincuente colombiano quien es representado por Diario Crónica como una persona problemática y conflictiva dando lugar a la percepción pública de inseguridad ante el inmigrante quien es sospechado como criminal. Esta idea de criminalización del inmigrante que construyen los medios de comunicación, produce efectos negativos en la persona imputada de un delito, ya que a raíz de esta estigmatización, muchas veces se producen fallos judiciales en los que no sólo se condena penalmente a un extranjero, sino que en algunos casos, se procede también a su deportación.

Por otro lado, el artículo periodístico, hace énfasis en los antecedentes penales que eventualmente se tienen del imputado del delito, y robos previos reforzando así el reclamo social de medidas punitivas ante la presencia de un delincuente de origen extranjero. En este punto, se sostiene que: “...El detenido es un ciudadano colombiano de 26 años que tenía pedido de captura vigente por robo y que, momentos antes, también le había sustraído la cartera a una jubilada de 70 años”. De esta forma, se ubica al delincuente en una posición de extranjero criminal y a las víctimas en personas de bien. Estos prejuicios en relación a la criminalización del inmigrante, son fenómenos sociales que se construyen sobre la base de un estereotipo como elemento cognitivo al que se le agrega un componente de valoración negativa respecto de una determinada categoría social (Van Dijk, 1994).

Los medios de comunicación deberían ser conscientes de las consecuencias que trae el lenguaje estereotipado tanto para la persona que se encuentra involucrada en un hecho delictivo como en la sociedad. En este sentido, Rodríguez González señala que:

“El lenguaje cotidiano refleja, como la vida misma, los valores culturales y morales de nuestra sociedad. Pero también los transmite y refuerza, de ahí el enorme poder de la palabra. Los prejuicios contra cualquier minoría o grupo social que se siente desfavorecido, perseguido o proscrito en algún momento de la historia, por razón de su sexo, etnia, o cualquier otro factor, enseguida afloran en el lenguaje cargando de connotaciones negativas los términos empleados para designarlos. Y como reacción, para contrarrestar o mitigar sus efectos y ocultar una realidad que se percibe como ingrata e indeseable,

los habitantes a veces rehúyen o edulcoran la expresión por medio de eufemismos o bellas palabras” (2003: 1).

Por ello, es recomendable evitar mencionar la nacionalidad de la persona cuando ello no sea necesario y no aporte nada importante a la noticia y mucho menos si la noticia es referida a un hecho delictivo.

Continuando con el relato de Crónica, el 10 de octubre de 2019 se publicó un artículo titulado: “Impactantes detalles de la autopsia a la joven hallada en cámara séptica”.

Esta noticia policial utiliza un discurso sensacionalista aportando datos aberrantes respecto a las condiciones en la que fue encontrado el cadáver de Alejandra Martínez, una chica hallada en un pozo ciego en José C. Paz. Esto se sostiene en el primer párrafo de la nota cuando se describe lo siguiente: “María Alejandra Martínez, la joven cuyo cadáver fue encontrado este miércoles en un pozo ciego de un aserradero de la localidad bonaerense de José C. Paz, fue asesinada de cinco balazos y tenía una pierna cortada post mortem, según los resultados de la autopsia, informaron fuentes judiciales y policiales”.

Por otro lado, se describen los detalles de la autopsia, en los cuales se remarcan datos escalofriantes respecto de la autopsia: “Según las fuentes, la víctima presentaba uno de esos balazos en la cabeza y los otros cuatro distribuidos entre el tórax y el cuello”. Asimismo, se brindan detalles de la pierna que fue cortada a la joven: “Los médicos también detectaron que, ya fallecida, a Martínez le cortaron la pierna derecha a la altura de la rodilla, aunque la amputación fue incompleta”.

Crónica utiliza la violencia y la catástrofe para provocar fascinación y emociones fuertes sobre las personas con el objetivo de captar su atención. A esto, se le suma el morbo y la idea que se instala en la audiencia de sentirse a salvo en comparación con aquellas personas que sufren hechos graves. Este discurso sensacionalista que ofrecen los medios de comunicación y en este caso Crónica, conlleva a la inspiración del miedo en la sociedad incrementando la sensación de inseguridad frente al delito.

En este sentido, De Pablos Coello sostiene que: “Las malas noticias y las desgracias ajenas originan ansiedad en los lectores y a su estela aparece brillante una manifestación humana del efecto Pavlov en los animales: se despereza un angustioso interés por conocer detalles, por estar alerta ante la mala nueva que afecta a otro” (1997: 23-24). De esta manera, el miedo y el riesgo son una fuente efectiva de venta en el

sensacionalismo mediático. El tratamiento intensivo que los medios le otorgan a las noticias sobre hechos graves, muchas veces difiere de los hechos reales y este tratamiento tiene como objetivo infundir un riesgo percibido a la gente como real. A tal efecto, según Gil Calvo:

“En cuanto suena la alarma del escándalo, aunque sea por azar, error o ignorancia, todos los periodistas se ven obligados a tomarla en cuenta por si acaso estuviese acertada, haciéndose eco de ella para replicarla con unanimidad hasta magnificarla entre todos por puro efecto de bola de nieve” (2003: 102).

Los detalles e imágenes impactantes en lugar de ser útiles para la comprensión del hecho, sólo conducen a dar forma al espectáculo y al morbo. Siguiendo la lectura de la noticia, se criminaliza a la víctima cuando se dice que entre la misma y el imputado había denuncias cruzadas previas al hecho. Respecto a lo mencionado, en otro párrafo se expresa que:

“Fuentes judiciales confirmaron que el primero en denunciar fue Vallejos, el 4 de junio pasado, cuando se presentó en la Comisaría de la Mujer de Pilar para decir que Martínez le había robado 8.000 pesos, que su pareja era consumidora de clonazepam, que le había pegado y lo había amenazado con que le iba a mandar a sus familiares para que lo lastimen” (Crónica, 2019).

De esta forma, la manera en la que esta noticia policial se refiere a la víctima, da cuenta de la afectación del derecho a la dignidad y de la persona hacia quien fue asesinada. Esto se sostiene en otro párrafo donde se expresa lo siguiente: “De todas formas, Carballido (Fiscal de la causa) dispuso que sea entrevistada (la víctima) por una asistente social ante quien afirmó que ella se autolesionaba, que cuando declaró en la comisaría estaba “empastillada”, habló bien de Vallejos (el imputado) y reiteró su intención de que se cierre la causa”.

En opinión de Natalia Gherardi:

“la cobertura de estas noticias generalmente carece de un enfoque de derechos, se posiciona desde el morbo de las noticias “policiales” y se recurre a imágenes estereotipadas y discriminatorias de las mujeres, calificando su condición de “víctimas” en función de sus acciones pasadas, su edad, preferencias y contexto socioeconómico” (2016: 33).

Esto demuestra la poca sensibilidad humana con la que Crónica relata la noticia policial dejando de lado el respeto por la dignidad de la persona y de los familiares de la víctima.

Siguiendo la línea de Crónica, el 4 de octubre de 2019, el Diario difundió una nota cuyo título reza: “Caen bestias que asesinaron, mutilaron y le sacaron los ojos a joven gay”.

Esta publicación de Crónica, describe la detención de dos personas de sexo masculino acusados de ser los autores del crimen de un joven de 25 años donde uno de los implicados según la fuente, mantenía una relación amorosa con la víctima y la habría engañado para realizar un trío sexual con un tercer hombre. En primer lugar, el título hace hincapié sobre la orientación sexual de la víctima al afirmar que se trata de una persona “gay”, donde luego amplía que se habría producido un trío entre homosexuales reforzando el relato estereotipado respecto a la orientación sexual de la víctima y de los acusados. Estos prejuicios sobre la identidad sexual produce consecuencias en los derechos de las personas afectadas o implicadas, ya que operan como modos de encasillamiento de grupos sociales los cuales son percibidos como diferentes (Kornblit y Adaszko, 2008) vulnerando el derecho a la igualdad, y no discriminación, entre otros.

Según Naciones Unidas, los principios de igualdad y no discriminación “son parte de las bases del estado de derecho”. En este sentido, los Estados Miembros en la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho, señalaron que:

“Todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están obligadas a acatar leyes justas, imparciales y equitativas, y tienen derecho a igual protección de la ley, sin discriminación (Párr. 2). También se comprometen a respetar la igualdad de derechos de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión (Párr. 3) (Declaración de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre el Estado de Derecho en los planos nacionales e internacionales, 2012: 2)”.

En cuanto al derecho a la no discriminación, Zepeda explica que: “es la llave de entrada para todas las personas, en condiciones equitativas, a todos los derechos. De esta manera, el derecho a la no discriminación se presenta como una suerte de derecho a tener derechos (2006: 25).

Por otra parte, el autor sostiene que la no discriminación es una garantía que constituye la ley del más débil, ya que obliga al Estado a no atacar y no avalar ataques contra los individuos que son objeto de prejuicios negativos y de estigmas sociales producto de la pertenencia a un grupo subvalorado. La no discriminación, es un derecho fundamental de toda persona y merece protección por parte del poder político en términos de garantías individuales o derechos humanos (*Ibídem*, 2006). El tipo de comentarios relacionados a la orientación sexual de la víctima/imputados que utiliza Crónica en esta noticia, fortalece los discursos discriminatorios que son utilizados en la cobertura mediática de noticias policiales.

Otro detalle que contiene la noticia, es la forma calificativamente negativa con la que se describe a los presuntos autores del hecho: “bestias, criminales”, esto se observa tanto en el título de la publicación como en uno de sus párrafos que reza lo siguiente: “Voceros revelaron a cronica.com.ar que los criminales fueron apresados en fincas situadas en Villafañe al 1300 y en Quirno Costa al 1100, en Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires”. Esto, produce un efecto negativo en la sociedad ya que la opinión pública muchas veces, reclama medidas punitivas en virtud a los acontecimientos que se dan a conocer a través de los medios de comunicación, lo que afecta también el derecho de principio de presunción de inocencia.

En relación a este principio De Anda Juárez, afirma lo siguiente: “...se proscribe la presentación del acusado y darlo a conocer como culpable ante los medios de comunicación, ya que esto incide en preconcebir la idea generalizada de la comisión del hecho delictivo, fomentando con ello una presunción de culpabilidad” (2016: 20).

Por este motivo, los medios de comunicación no deben interferir en el trabajo de los organismos de justicia, para evitar la difusión de datos anticipados y circunstancias relacionadas a un hecho policial que puedan afectar los derechos de las personas implicadas.

Por último, otro ejemplo de Crónica es la publicación con fecha 7 de octubre de 2019, cuya nota reza en su título: “Condenaron a 12 años a camionero que atropelló y mató a un piquetero”.

La información en este caso, refiere a la condena penal de un camionero acusado de haber atropellado y matado a un hombre que participaba de un corte de ruta en reclamo de mejoras salariales sobre una ruta santafesina en 2017. Si bien, en la nota se menciona el

nombre y apellido de la víctima más adelante, el énfasis surge en el título principal al decir que quien murió es un “piquetero”. En este sentido, la lectura que se hace de esta noticia, es que se criminaliza la pobreza o la protesta social donde en este caso, se demoniza la figura del “piquetero” cuya denominación es utilizada por los medios para identificar a un sector social representado como peligroso ante una sociedad de decentes.

Este discurso, afirma el estigma en relación a los llamados “piqueteros” y afecta los derechos de las personas que en este caso, a través de un corte de ruta, intentan expresar un reclamo laboral ante la grave crisis económica que sufren ellos y su familia. Y como consecuencia de esta afirmación, se producirá desigualdad social para un determinado sector. Esta desigualdad tiene relación con la interpretación que tienen algunos sectores de la sociedad respecto al estilo de vida que lleva la gente pobre y es producto de haberse internalizado en el imaginario social las representaciones diarias sobre las familias pobres en el país.

En este sentido, la igualdad de oportunidades implica las posibilidades de tener derecho a la salud, a la educación, y a una calidad de vida suficiente para lograr la felicidad. Sin este punto de partida, ningún derecho puede ser posible debido a que los sectores vulnerables quedarán expuestos a una vida sin derechos (Secchi en Colombo, 2007).

El estigma como fenómeno social, explica las conductas de prejuicio negativo hacia ciertas personas por su pertenencia grupal. El estigma, está inscripto en un orden simbólico en el cual quien posee el atributo estigmatizado, ya ha sido rechazado de antemano. El proceso de estigmatización se da porque existe un conjunto de prejuicios previos que ponen en desventaja a determinados grupos sociales (Rodríguez Zepeda, 2006).

Otro trabajo que realiza un análisis de la producción del discurso “deshumanizante”, es el de Matías Artese titulado “Protesta social y discriminación político-ideológica”, un estudio de casos durante los cortes de ruta en la Argentina. El trabajo de Artese, busca indagar las representaciones sociales de los conflictos que conforman un cuerpo de discriminación y estigmatización política e ideológica. Dentro de este contexto, el autor sostiene que:

“Durante los episodios de protesta se ha generado en el plano simbólico un nosotros vinculado al orden, la paz y las libertades civiles, frente a un otros conformado por los participantes de hechos de protesta, vinculados al

desorden, la ilegalidad y la violencia, y cargados con signos negativos de distinta índole” (2008: 34).

Ese “otros” produjo una identidad social que no sólo duró en el desarrollo de los conflictos, sino que perduró en el tiempo bajo el estigma negativo de “piqueteros”. Representar una protesta en el marco de un conflicto social como un hecho delictivo, constituye un acto de discriminación político-ideológica y una violación al derecho de manifestarse (*Ibidem*). En otras palabras, ese “otros” es ni más ni menos que las personas que la están pasando muy mal, con familias que están sufriendo hambre y desnutrición. De esta forma, la figura del “piquetero” y las protestas son representadas en los discursos de manera descalificadora, discriminadora y estigmatizadora. El piquetero en el análisis del discurso representa el delito, vandalismo, vagancia, militancia política. Y todo ello, es parte de los procesos no sólo de discriminación sino también de deshumanización.

CAPITULO 3. SENSACIÓN DE INSEGURIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En el presente capítulo, se estudiará la influencia que tienen los medios masivos de comunicación en el incremento de la sensación de inseguridad, como así también el efecto en la opinión pública. Se entiende a la opinión pública como “la expresión de cualquier colectivo con capacidad de manifestarse acerca de un objeto de origen público o privado, pero de exposición pública, en un ámbito visible” (D’Adamo, García Beaudoux y Freidenberg, 2000: 94), y es un fenómeno social actualmente inseparable de la comunicación mediática. Hay quienes afirman, incluso, que los públicos son “producto de los *outputs* de los medios, grupos cerrados y cultivados a través de los mensajes” (Gerbner, 1973: 181).

3.1. El concepto de sensación de inseguridad en relación al delito.

El sentimiento de inseguridad no es proporcional al riesgo objetivo y resulta del efecto de deseo de protección socialmente construido a través de la opinión pública y los medios de comunicación. Según Cecilia Varela, el incremento en el uso de este concepto, fue asociándose con el tiempo a la producción de las encuestas de victimización como medio de investigación y para el desarrollo de una nueva concepción de la seguridad urbana. De esta manera, se busca reunir la preocupación por la seguridad objetiva y la seguridad subjetiva de los habitantes (2006).

La sensación de inseguridad según la autora “se advierte como una variable independiente al riesgo de victimización...derivado en gran medida de la visión distorsionada del mundo que ofrecen los medios de comunicación coadyuvando de este modo, a la difusión del pánico y alarma social” (*Ibidem*: 3). Los procesos victimológicos dan cuenta de la paradoja que explica que sectores de menor riesgo de sufrir algún delito presenten los niveles de miedo al delito más alto y por el contrario; que aquellos que más expuestos al delito están, muestren niveles de temor más bajos.

Por otra parte, sólo es posible cuantificar los hechos denunciados por ende, hay una gran cantidad de delitos que entran en lo que se ha denominado “cifra negra de la criminalidad” que son los delitos que están afuera de los datos oficiales. Alcira Daroqui explica que la problematización del delito puso su acento en relación a un pequeño número de delitos, los cuales dominan la alarma social y el miedo a la criminalidad. En este

sentido, se reconoce el abandono de la idea de la seguridad en sentido de provisión de garantías de derechos y de protecciones sociales a la población (2003).

A su vez, la autora plantea la cuestión seguridad-inseguridad en términos de la Defensa Social², la cual transita por dos vías: el aumento y consolidación del sistema penal, y la incorporación de estrategias vinculadas a la prevención del delito. Esta ideología de la Defensa Social, ha producido discursos y prácticas que llevaron a que el sistema penal se convierta en instrumento de la reproducción de desigualdad social. Desde esta base, un individuo peligroso o desviado no será sólo el que cometa un delito, sino también aquél que la justicia encierre en la cárcel o sancione ejemplarmente. Esto ha sido una constante que construye a su vez, un estereotipo del delincuente históricamente identificable. Como efecto colateral no sólo serán los pobres, sino también los varones y los jóvenes lo que se ajustarán a la selectividad de delincuente. A tal efecto, se puede imaginar una sociedad dividida entre los unos y los otros (*Ibídem*).

Como consecuencia de la demanda de seguridad ciudadana se fortalecerá el sistema penal, se crearán juzgados, habrá aumento de penas y construcción de cárceles. Por otra parte, se expandirán discursos políticos sobre el delito urbano, utilizando como herramienta a los medios de comunicación. Al respecto, Daroqui explica que “es la comunidad quien se hace cargo de difundir, identificar y trazar estrategias para combatir y resguardarse de los actos delictivos y de las incivildades que afectan la convivencia social” (*Ibídem*: 5).

A este modelo de intervención lo define como situacional, pero también habla de otro modelo, el social; el cual intenta modificar las causas de la criminalidad mediante el desarrollo social. Sin embargo, queda claro que de los dos modelos se le otorgó más importancia al primero para tratar el problema del delito e inseguridad. En cambio, el segundo, no integra la agenda de gobierno respecto a la asistencia y protección de los

² La ideología de la defensa social nació al mismo tiempo que la revolución burguesa, y mientras la ciencia y la codificación penal se imponían como elemento esencial del sistema jurídico burgués, ella tomaba el predominio ideológico dentro del sector penal (BARATTA, Alessandro. *Criminología crítica y crítica del Derecho Penal*. Editorial siglo XXI, México: 1986, p. 36). Baratta enuncia una serie de principios que destaca como sus fundamentos: el principio del bien y el mal, el principio de culpabilidad, el principio del fin o de la prevención, el principio de igualdad y el principio del interés social y del delito natural (DAROQUI, Alcira, 2003). Las seguridades perdidas. Argumentos. Buenos Aires, Argentina: Revista Electrónica de Ciencias Sociales, N° 1, p. 2). Por otro lado, el positivismo criminológico hablaba de defensa social cuando se referían al derecho de la sociedad (estado) a defenderse contra sus agresores individuales o colectivos; no sólo los delincuentes sino también quienes desafiaban las normas establecidas de interacción social (SALVATORE, Ricardo (2001). *Sobre el surgimiento del estado medico legal en la Argentina (1890-1940)*. Sante Fe, Argentina: Universidad Nacional del Litoral, Estudios Sociales, Vol. 20, N° 1, p. 87).

derechos de las mayorías excluidas por la globalización económica, producto de las políticas neoliberales. Asimismo, el enfoque en las demandas de Defensa Social produjo el ocultamiento de otras inseguridades, haciendo creer que los habitantes sólo serían víctimas de un delito callejero.

Siguiendo esta línea, el sociólogo Alejandro Hener, al interrogar a personas entrevistadas sobre su impresión más inmediata ante la palabra *inseguridad*, obtuvo la siguiente conclusión: “Surge claramente el sentido que la asocia con el delito; particularmente al delito callejero y al temor por el generado” (2009: 7-8). Asimismo, cuando se les pregunta a los entrevistados sobre inseguridad delictiva asocian dicho término con el significado de lo que la gente piensa; sin especificar algún otro dato.

Por otro lado, Diego Torrente refiere que “la seguridad, o inseguridad es, en última instancia, una percepción subjetiva, y además, una percepción que está influida socialmente” (1998: 2). Cabe destacar que el delito ha sido considerado como una excrescencia, producto de actos irracionales y de la falta de represión y control de sí mismo (Pegoraro, 2000). Además, y en relación al sentimiento de inseguridad delictiva, señala el autor que el consumo de noticias sobre hechos delictivos vuelve a la gente más insegura (*Ibídem*).

De acuerdo con María Molero, la autora refiere que “la inseguridad ciudadana frente a la criminalidad es el producto de una compleja construcción social dentro de la cual el riesgo efectivo del crimen tiene un papel relativamente marginal” (2001: 4). Conforme a esta cuestión, la autora explica que la inseguridad proviene de cosas de la vida cotidiana. En este sentido, considera que tales cosas son: el exceso de noticias respecto a hechos delictivos por parte de los medios de comunicación, factores sociales, e indicadores como la edad y el sexo (*Ibídem*). Todos estos elementos, hacen que el sentimiento de inseguridad frente al crimen sea mayor o menor.

De tal manera, el riesgo real que tiene un sujeto de sufrir un delito, difícilmente esté a la altura del temor. Dentro de este contexto, Mascott Sánchez señala que “la mayor parte de las encuestas de victimización realizadas en distintos países del mundo indican que el temor al crimen y la sensación de inseguridad que enfrentan los ciudadanos es mayor a la posibilidad de ser sujeto de un delito” (2002: 17). En este punto, la autora señala que el sentimiento de inseguridad tiene poca relación con el riesgo objetivo y depende de otros factores tales como la edad y el sexo, las condiciones sociales, los hábitos de vida, el

tamaño de las ciudades, la composición de la población, y los medios de comunicación (*Ibídem*).

3.2. La sensación de inseguridad y las encuestas de victimización.

Dammert y Malone desarrollan una serie de hipótesis en las cuales se sostiene que a medida que los crímenes se tornan más prevalecientes, los ciudadanos se tornan más inseguros frente a cualquier tipo de crimen (2002). De esta manera, es necesario analizar el impacto que proporcionalmente los altos niveles de crímenes tienen sobre la sensación de inseguridad de los ciudadanos. Para observar cómo se relaciona esta teoría con datos de la realidad, tenemos la encuesta de victimización, que es un elemento de medición respecto a la criminalidad, la sensación de inseguridad experimentada por los ciudadanos y el funcionamiento de los cuerpos encargados de la prevención y la sanción del delito.

Por otro lado, las encuestas de victimización: “relevantan en la actualidad los distintos aspectos que conforman el fenómeno social delictivo tanto en sus dimensiones objetivas (cuantificación y caracterización de los delitos, principalmente) como en sus aspectos subjetivos: el miedo al delito, las inquietudes y las estrategias de autoprotección” (Encuesta Nacional de Victimización, 2018: 6)

La Encuesta Nacional de Victimización del año 2017 fue una iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Republica Argentina (INDEC). En este informe se presentan indicadores sobre la prevalencia de delitos contra el hogar y las personas, denuncias, medidas de seguridad, desempeño del sistema de seguridad pública, y percepción de la seguridad ciudadana durante el periodo 2016-2017. (*Ibídem*). Entre los resultados principales, de la encuesta surge que durante el año 2016, el 13,6% de los hogares del país sufrió al menos un delito y el robo o hurto en vivienda presenta la mayor prevalencia: afectó al 8% de los hogares argentinos (*Ibídem*, 2018: 8).

Por otro lado, del informe surge que: “el 85,4% de los hogares argentinos cuentan actualmente con alguna medida de seguridad, con el objetivo de protegerse de la delincuencia” (*Ibídem*, 9). Agregado a lo anterior, el 85,1% de la población del país considera la inseguridad en su ciudad de residencia como un problema “bastante o muy grave” y menos de la mitad de la población (47,6%) declaró sentirse segura o muy segura caminando sola cerca de donde vive (*Ibídem*).

En cuanto a los delitos contra las personas con mayor prevalencia a nivel nacional se encuentra el hurto personal, modalidad delictiva de la que fue víctima el 7,5% de la población de 18 años y más, el robo con violencia (6,2%) y la amenaza (4%), mientras que las restantes prevalencias son inferiores al 3% (*Ibídem*, 35). Lo llamativo del asunto es que, entre los delitos contra las personas, los delitos no violentos son denunciados en proporciones menores que los violentos. En este sentido, de los cuatro delitos contra la persona con mayores tasas de no denuncia, tres son delitos no violentos: soborno, estafa y hurto personal (*Ibídem*: 44). En el caso del fraude bancario, es denunciado en la mitad de los casos.

En cuanto al bloque de percepción de seguridad ciudadana, la situación de incivilidad más mencionada por la población en sus barrios durante 2016 es el consumo de alcohol en la calle, seguido por el consumo de droga en la vía pública y las riñas o peleas callejeras en tercer lugar (*Ibídem*: 89). Mark Warr sostiene que ciertas incivildades pueden provocar miedo. Esto se ve en las características físicas de los vecindarios, así como también en las señales sociales como mendigos, gente en situación de calle, prostitutas, etc. (2000).

3.3. La relación entre medios y sensación de inseguridad.

Por otro lado, un aspecto importante en la relación de los medios y la seguridad, es la investigación sobre la construcción social del miedo. De acuerdo con esto, la problemática respecto de la inseguridad ha sido el origen de temores en varias ciudades del mundo; y esto se fortalece con la incorporación de estadísticas en las noticias que intentan señalar el incremento de delitos, situación que agrava la percepción de inseguridad en la sociedad, aunque incluso según el ISVP³ lo publicado por la prensa distorsiona los datos de las estadísticas de la Dirección Nacional de Política Criminal, del Ministerio de Justicia de la Nación.

Los trabajos efectuados por Gerbner y sus colaboradores, realizados en la *Annenberg School for Communication* de la Universidad de Pennsylvania en Estados Unidos, evidenciaron que los medios contribuyen a la formación de una idea distorsionada de la violencia social, a la creación de una imagen que alimenta en el público la percepción

³ El Índice Social de Violencia Percibida es llevado a cabo por el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB), desde el año 2000. Para la construcción de los puntajes mensuales, se revelan diariamente las noticias referidas al crimen, violencia social y delito, publicadas en algunos de los principales medios impresos de Argentina: *Clarín*, *La Nación*, *Ámbito Financiero*, *Noticias* y *Página 12*.

de que la criminalidad y el delito son mayores de lo que realmente son cuando se evalúan y comparan los datos mediáticos con las estadísticas oficiales acerca de estas mismas cuestiones (Gerbner, G. y Gross, L., 1976; Gerbner G., Gross L., Jackson-Beeck, M.; Jeffries-Fox, S. y Signorielli, N., 1978; Gerbner, G., Gross L., Morgan, M. y Signorielli, N., 1980; Gerbner, G., Gross L., Morgan, M. y Signorielli, N., 1982; Gerbner, G., Gross L., Morgan, M. y Signorielli, N., 1986; Gerbner, G., Gross L., Morgan, M., Signorielli, N. y Jackson-Beeck, M., 1979).

En su libro *Ética para Periodistas*, Restrepo sostiene que existen factores que terminan fomentando el sensacionalismo propio de la prensa amarilla, como la falta de garantías para el buen ejercicio profesional, la concentración y monopolio de los medios, la obsesión por el *rating* de sintonía o circulación, y la inmediatez (1995). En este sentido, “El sensacionalismo es una deformación interesada de una noticia, implica manipulación y engaño y por lo tanto, burla la buena fe del público” (1994: 51).

Será sensacionalista toda noticia, texto o imagen que casi no deja espacio a la reflexión, y que dada su “crudeza” es aceptada por muchos lectores. Por esto, se puede llegar a la hipótesis de que una noticia sin fundamento y reforzada con tinte sensacionalista genera pánico e inseguridad. De esta manera, el incremento de la percepción de inseguridad en la población se ve impulsado por la desmedida amplificación que conceden a los hechos delictivos y violentos los medios de comunicación.

Otro dato importante en la difusión de noticias sobre hechos delictivos, y que está relacionado con el concepto de sensacionalismo, es la deshumanización que la edición informativa lleva a cabo con relación al delincuente. En este punto, cuando se informa sobre la muerte de un delincuente a raíz de un enfrentamiento con la policía, se le otorga una dimensión impactante y espeluznante para incrementar el relato de la noticia.

Asimismo, se toman en cuenta las características singulares de los delincuentes, las cuales producen mayor impacto en la noticia, y por ende mayor visibilidad. En muchos casos, se violan Derechos Personalísimos, que tal como indica Restrepo y se formuló en el primer capítulo, son fundamentales del ser humano; se derivan de su condición como tal, son innatos, inherentes a las personas, y de carácter extra patrimonial (1995).

Agregado al punto anterior, los medios de comunicación cumplen un papel importante en cuanto al planteo de políticas de seguridad, ya que proponen políticas de prevención. En el caso de fenómenos como la violencia social, la inseguridad y la

criminalidad, las atribuciones hacia las que los medios guían a los ciudadanos terminan, en muchas oportunidades, dando paso a la elaboración de teorías simplistas o extremistas para la solución de la problemática (D'Adamo y García Beaudoux, 2007). En este sentido, la opinión pública, influenciada por la difusión mediática de noticias sobre hechos de inseguridad delictiva, adoptará una postura de reclamo de mayores políticas de represión del delito.

Según la perspectiva de Germán Rey, los problemas de seguridad ciudadana son producto del crecimiento y las modalidades de delito y el aumento de la percepción de inseguridad (2008). Además, el autor agrega que el llamado “miedo al delito” radica en el temor hacia el “otro” diferente (factor racial, edad, nacionalidad) y especialmente a las noticias que difunden los medios de comunicación. Asimismo, el problema de la inseguridad en América Latina entrelaza la vida privada con la pública. Dentro de este contexto, el autor considera que:

“El incremento de los crímenes, la aparición de nuevas formas de delincuencia, el fortalecimiento de determinados actores violentos, la inseguridad en las calles o la impunidad, han acrecentado la inconformidad social hasta el punto de que el tema de la seguridad es uno de los asuntos fundamentales de la agenda pública y además un motivo permanente de inconformidad, presión e inclusive protestas de la gente” (2008: 86).

Con respecto al tema de la comunicación, éste resulta ser un eje central en los problemas relacionados con la seguridad, ya que el crimen es un acontecimiento que sobresalta los límites de la convivencia y tiene consecuencias generalizadas y una rápida difusión en la sociedad. Lo preocupante en la cuestión comunicación y crimen es el ambiente de la inseguridad, la desinformación e incertidumbre provocada por este tipo de hechos.

La violencia en los medios es dramática y habla de las normas sociales y de las relaciones, de medios y fines, de ganadores y perdedores, de los riesgos de la vida y del precio de transgredir las reglas sociales. Los dramas impregnados de violencia muestran quién se sale con la suya, quién no, y quiénes son las víctimas respecto de qué, cuándo, por qué, cómo y contra quién (Gerbner y Gross, 1976). Por otro lado, las historias presentadas en los medios explican (más o menos) cómo funcionan las cosas, qué son las cosas, y qué podemos o debemos hacer respecto de ellas (Gerbner, 1990). En este sentido, la

comunicación cumple un papel fundamental en la repercusión social, debido a la rapidez de su asimilación y duración.

Sin embargo, la sociedad tiene cada vez menos confianza en los medios a pesar de que son una fuente crucial de construcción mediática de inseguridad. La inclusión de los temas relacionados con el incremento delictivo dentro de las agendas, es producto de la incorporación de datos estadísticos respecto a esta problemática y cómo la gente percibe dicha difusión por medio de la prensa diaria o televisiva (Rey, 2008).

El jurista Raúl Zaffaroni expone la cuestión de los medios de comunicación y su relación con la sensación de inseguridad en su obra *“La cuestión criminal”*. En ella, explica que:

“Las personas tienen la visión de la cuestión criminal que construyen los medios de comunicación, o sea, que se nutren o padecen una criminología mediática y ésta, siempre apela a una creación de la realidad a través de la información, subinformación y desinformación en convergencia con prejuicios y creencias, basada en una etiología criminal simplista asentada en causalidad mágica” (2012: 210).

Dentro de este contexto, el sociólogo Gabriel Kessler refiere que la cuestión de los medios masivos de comunicación lleva a que la gente se posicione de manera distinta respecto a las cuestiones de inseguridad. En este sentido, la información que se extrae de encuestas sobre percepción de problemas públicos amplificadas por los medios de comunicación; coadyuvan a posicionar a la sociedad respecto a un tema. Sin embargo, no se informa acerca del aumento o descenso del nivel delictual (2006).

Con respecto a la relación entre la opinión pública, medios y seguridad, Rey sostiene que: “sobre los temas de seguridad hay una notable falta de análisis, y una ausencia de densidad en la discusión de las causas o en la evaluación de las consecuencias” (2008: 93). Como la memoria de la opinión pública sobre hechos de seguridad está hecha a corto plazo, los hechos impactan un tiempo y luego desaparecen; y esto tiene que ver con las estrategias de suspenso que utilizan los medios de comunicación.

Así también, las estigmatizaciones están a la orden del día en la percepción de inseguridad que tiene la opinión pública. Una vertiente importante en la relación de los medios y la seguridad, es la exploración sobre la construcción social del miedo. En tal sentido, el autor detalla algunas de las tendencias más persistentes en la representación del

conflicto que realizan los medios. Entre ellas, menciona: la fruición del registro, la ausencia de contextos, los *crescendos* emocionales de las narraciones, la opacidad de los hechos, la criminalización del “otro”, y la sobrevaloración de lo inseguro (*Ibídem*). Respecto a la criminalización del “otro”, considera lo siguiente:

“Al recorrer los textos mediáticos es posible percibir desde la estereotipia del crimen y del criminal, hasta las formas de discriminación con las que se miran determinados sectores de la sociedad, grupos excluidos, poblaciones que se denominan como “vulnerables”. Hay unos ciertos a priori de las noticias que juegan poderosamente en la reconstrucción del crimen y en la escenificación de los quiebres de la convivencia: la vida en los barrios populares, los migrantes, los jóvenes desempleados y pobres, los grupos marginales (por ejemplo, drogadictos o mendigos)” (*Ibídem*: 101).

Por su parte, Omar Rincón problematiza sobre cómo pensar comunicativamente la seguridad ciudadana. El autor se pregunta si la inseguridad ciudadana es un invento mediático o una realidad. En este aspecto, se genera una controversia entre periodistas y miembros de la seguridad, los cuales no llegan a una conclusión definitiva. Asimismo, analiza la construcción de la noticia del delito y qué tratamiento debería recibir respecto a estos hechos (2008).

En términos estadísticos, el país que más noticias de inseguridad aporta según el autor es El Salvador, y en segundo lugar se encuentra la Argentina junto a Perú (2008). Lo paradójico del asunto es que países con mayores tasas delictuales como Brasil, México y Colombia no difunden tantas noticias policiales como la Argentina. Una explicación sería que en los países mencionados anteriormente es costumbre que ocurran hechos de inseguridad, por lo que ya no resulta una novedad su tratamiento. En cambio, el caso de la Argentina como no es tan grave, cuando se produce un acontecimiento delictual necesita que se le otorgue mucho más tratamiento mediático (*Ibídem*).

Otro aspecto a tener en cuenta es que cada vez es más frecuente advertir que las noticias policiales están en primera plana, pero cuando el lector observa el informe completo en la televisión o lee el mismo se descubre que la noticia policial no era tan grave. Pero el que un hecho delictivo violento aparezca en la portada de un diario, produce en el lector una percepción de inseguridad.

Además de esta problemática sobre la difusión de noticias graves, Rincón establece que “nunca contamos la historia completa, nunca contamos qué fue lo que hizo la policía, qué fue lo que hizo el gobierno. Nos quedamos con una parte del asunto nada más” (*Ibíd.*: 73). Desde otra perspectiva, Kessler afirma que los medios de comunicación son una pieza fundamental en la construcción del pánico moral⁴ (2009). Otro problema está en las fuentes de información. En este sentido, cuando las fuentes provienen de la policía o el gobierno, muchas veces los datos son falsos o insuficientes.

Además de que la información suministrada se construyó con fuentes poco confiables, el periodista termina redactando la noticia a través de los datos aportados por las víctimas. Dentro de este contexto, Ramonet explica que “un determinado montaje de unas imágenes puede construir un acontecimiento que no ha ocurrido nunca, pero que el telespectador siente e interpreta como real debido a la carga emocional y dramática de las imágenes” (1986: 19).

Por otro lado, en la noticia policial interactúan: el periodismo, la política y la cultura. En Argentina, actualmente se aprecia que los hechos delictivos se tornaron más violentos que antes, y esto produce la sensación de que el delito ha aumentado. Además, otro cambio sustancial está en que el número de noticias sobre inseguridad ciudadana no ha crecido aunque sí lo ha hecho el sentido sensacionalista con el que se redactan o transmiten las noticias policiales; lo cual llama más la atención del público.

En cuanto al relato periodístico se destacan tres factores: la tendencia a caracterizar determinados delitos como *olas*, por ejemplo: si se producen dos secuestros correlativos durante dos días seguidos, la prensa dirá que hay una *ola* de secuestros. Sumado a lo anterior, se tiende a enfatizar un suceso violento como próximo o cercano. Otro aspecto refiere a que el delito nunca descansa, de esta manera los medios siempre están alertando sobre el acecho de un ex convicto, etc. (Rincón, 2008). También se agrega otro elemento, la hipérbole respecto a la amenaza criminal. En palabras del autor:

“Se emplean términos como brutal, espeluznante, terrible, fatídico, sorpresivo, sangriento... Estos adjetivos se usan para calificar a los pobres;

⁴ Este término, fue utilizado por Stanley Cohen quien lo define como un episodio o grupo de personas que han sido definidas como una amenaza para los valores e intereses de la sociedad. Asimismo, el pánico moral produce una tensión social que no es fácilmente discutida dado que este pánico moral es tabú para mucha gente. En este sentido, el pánico moral es una reacción de un grupo de personas basada en la presesión falsa o exagerada de algún comportamiento cultural, como peligrosamente desviado y que representa una amenaza para la sociedad. (COHEN, Stanley “Folk Devils and moral panics”, McGibbon and Kee, London, 1972).

del rico se dice que se investiga presunto fraude que mueve millones y millones de dólares. Pero del delincuente de clase baja se dice que es absolutamente despiadado, que creó pánico, miedo, desesperación, terror” (2008: 78).

De acuerdo a lo analizado hasta el momento, es posible apreciar que existen diferencias y transformaciones respecto a la representación de la seguridad suministrada por los medios de comunicación. Dentro de la gama de cambios radicales, se podría decir que se ha pasado de la crónica roja al periodismo judicial; trayendo como consecuencias los cambios en las expectativas de la sociedad respecto al crimen, la naturaleza de la fuente de información, la forma de procesarla y el perfil de los actores.

3.4. La irrupción mediática del miedo al delito en la vida cotidiana.

El incremento de la percepción de inseguridad en la población se ve incentivado por la excesiva amplificación que otorgan a los hechos delictivos y violentos los medios de información. En este sentido, Mascott Sánchez sostiene lo siguiente:

“Los medios de comunicación influyen en el incremento de la sensación de inseguridad que experimenta una gran cantidad de personas...las causas de la inseguridad son muchas y los medios de comunicación contribuyen a agravarlas, al constituirse en fuentes de marcadas distorsiones en la percepción que el pueblo tiene respecto de ese fenómeno” (2002: 35).

En este sentido, se puede llegar a la hipótesis de que una noticia sin fundamento y con tinte sensacionalista produce en consecuencia, pánico e inseguridad. Para dar fuerza a esta cuestión, Fainberg sostiene que “los medios masivos de comunicación juegan un papel sumamente importante en el tema, pudiéndose apreciar en algunos casos, que una información malintencionada resulta ser una espiral generadora de pánico, de miedo y de inseguridad en la sociedad” (2004: 16). De esta manera, la alarma de pánico siempre estará activada para lo peor. A su vez, se observa que los medios de comunicación a través de las imágenes que ofrecen en demasía producen un efecto extra a nuestra sensación de inseguridad.

En el trabajo de Stella Martini se señala que los medios de comunicación marcan el rumbo de nuestras vidas entre hechos delictivos, probabilidades de ser víctimas, o caer en el miedo altruista. De esta manera, la autora señala que: “los medios aseguran que el crimen está instalado en nuestra cotidianeidad y ataca en todo momento y lugar, y que

funciona según su accionar azaroso, por lo que es posible percibirlo como una suerte de ruleta rusa social” (2009: 21). Esta noción funciona, tal como dice la autora citando a Josefina Ludmer, como *instrumento crítico ideal* (Ludmer en Martini, 2009: 21). Lo avasallante de los medios de comunicación respecto a la irrupción del miedo al delito en la vida cotidiana es, que al informar mensualmente alrededor de ciento cincuenta noticias sobre hechos delictivos, provocan alteraciones en cuanto a la incertidumbre y temor; ello a pesar de que sólo informan un nueve por ciento de los delitos oficiales (*Ibídem*).

Por otro lado, las víctimas de la inseguridad son politizadas a través de los medios de comunicación. En este sentido, Mercedes Calzado explica que “las víctimas de la inseguridad se configuran como un espacio relevante de la relación entre el campo periodístico y el campo político, como definidores de la sensación térmica securitaria” (2009: 2). Desde hace más de una década, en la Argentina la prensa tanto de papel como televisiva, intenta reflejar la sensación de inseguridad cotidiana como una realidad concreta sobre la integridad física y los bienes de las personas. Asimismo, la inseguridad delictiva es una prioridad en la agenda social, esto es en razón de lo que opina la gente y sobre lo que se recibe de los medios de comunicación.

El trabajo de Stella Martini intenta describir cuestiones relevantes tales como, la inclusión de la noticia policial en vistas a la cuestión política; donde se incluye a la opinión pública, los medios de comunicación, y los modos de su construcción. De esta manera, se busca establecer si su forma discursiva de emitir la información resulta importante o no para la sociedad (2009).

Al principio de la etapa moderna de la Argentina⁵ la noticia policial tenía un tinte político, servía para apoyar medidas políticas o para descalificar la inacción de un gobierno. En aquella época, la noticia policial se nutría con el aporte de estudios criminológicos con ascendencia en el positivismo; reverenciado en los sectores del poder. En este sentido, la criminología se focalizaba en la conducta del delincuente, sus características psicosociales y sus motivaciones. Así, la criminología positivista apuntaba al orden de la sociedad y al control social de los “*indeseables*” (*Ibídem*).

⁵El Estado moderno argentino surgió a partir del crecimiento económico basado en la exportación de productos agropecuarios, y una tranquilidad política coronada por la Federalización de Buenos Aires en 1880. El inicio de la modernidad en el país, trajo el surgimiento de nuevos sectores sociales: la clase obrera, la burguesía industrial y las capas medias. También se sumó la llegada de una gran cantidad de inmigrantes europeos.

Posteriormente, y sobre todo con el tan conocido y mediatizado caso *Blumberg*⁶, se puede advertir que los picos informativos más altos se dan según el acontecimiento periodístico y el grado de *noticiabilidad*. Esta noticia, una de las más politizadas en la historia de la criminología argentina fue motivo de la competencia entre los dos diarios de mayor tirada como La Nación, y Clarín. Estos diarios se disputaban los lectores mediante la difusión de entre 400 y 500 noticias relacionadas con el caso (*Ibídem*: 30). De esta manera, el caso *Blumberg*, marca la pauta de que las noticias que las autoridades brindan, deben ser confiables.

La construcción que realizan los medios de comunicación respecto a la seguridad es el reflejo de uno mismo en la noticia la cual toma injerencia en el imaginario delictivo de cada lector o televidente. En este sentido, éste procede a identificarse con la víctima, sintiendo que su vida y la de sus seres queridos están en peligro, y de esta manera apoya todo tipo de medidas que sean necesarias. La noticia implica la descripción del lugar del hecho y el testimonio de algunas fuentes, y el público sólo tiene esa información del hecho. Sin embargo, el lector siempre presencia el crimen a través de los ojos del periodista, bajo un relato ficcional (*Ibídem*).

Asimismo, no hay que perder de vista el efecto de encuadre (*framing*) de los medios. El concepto alude a un fenómeno psicológico que indica que las audiencias, al igual que los medios, encuadran la noticia que atrapa su atención: recogen los datos y los entrelazan en una narrativa que incluye una explicación causal, que servirá de parámetro para otras historias informativas. En muchas ocasiones, se establece una correspondencia entre el encuadre que los medios realizan de la noticia, y el que las audiencias realizan de ellas (McLeod y Kosicki, 1996). Por ello, muchas veces la opinión pública parafrasea lo que toma de los medios, sus reclamos, exigencias, y estigmatizaciones respecto al “otro” delincuente.

La información mediática muchas veces carece de consistencia y coherencia, y en muchas otras se repite la misma noticia varias veces al día; hasta que el público pierde interés en la noticia y ésta desaparece porque aparece otra nueva. Esto último, es propio del concepto de *agenda setting*, -la hipótesis de la construcción del temario-, teorizada por Shaw en 1979:

⁶ Axel Blumberg fue secuestrado el 17 de marzo de 2004 y posteriormente asesinado por sus captores. El caso “Blumberg”, fue un caso de pánico moral muy fuerte el cual generó una movilización colectiva y la promulgación de leyes que ya estaban en el registro legislativo. Su padre, Juan Carlos Blumberg se convirtió en un referente mediático, que brindaba charlas y conferencias sobre seguridad.

“La gente tiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos de que los *media* incluyen o excluyen de su propio contenido (...) Los *media*, al describir y precisar la realidad externa, presentan al público una lista de todo aquello en torno de lo que tener una opinión y discutir (...) El presupuesto fundamental de la *agenda-setting* es que la comprensión que tiene la gente de gran parte de la realidad social es modificada por los *media*”. (Wolf, 1987:163).

Es por ello que el dato periodístico procura tener algún tipo de relación con la opinión pública y el imaginario social. Al respecto, Martini sostiene que “la noticia sobre el crimen hace sentido en las conversaciones sociales, propone un diálogo y establece una apuesta en el espacio público” (2009: 32). Por otro lado, la noticia debe nutrirse de datos confiables, pero cuando eso no sucede el periodista realiza maniobras a los fines de ensamblar y retacear datos pobres.

De este modo, se busca construir un acontecimiento impactante del cual poco se sabe aún. Muchas de estas informaciones son llevadas a la luz por periodistas que en su afán de obtener una primicia, se manejan con fuentes oficiales *off the record*, o de otros medios no oficiales. Sin embargo, estas fuentes pueden ser falsas o desviadas a otros motivos que no concuerdan con la realidad del hecho.

En ese sentido, los periodistas también van a investigar un hecho relevante realizando tareas de campo (entrevistas con vecinos, comerciantes, transeúntes, etc.) dando lugar a la participación del público, dejando constancia que dichas personas pueden ser vecinas de los lectores o televidentes. Como se ha dicho anteriormente, la información policial tiene gran relación con la política de un gobierno, pero también los responsables de la información están sumergidos en una competencia con sus colegas por obtener primero una noticia. Esto lleva a que las mismas se completen con datos no confiables, con las consecuencias que ello produce.

La ausencia de información conduce a la imprecisión e interrupción de la noticia, contribuyendo así al desinterés público. Cuando esto sucede, aparece la figura del rumor, con la intención de demostrar que una verdad es más *verdadera* (*Ibídem*). Pero si el rumor corre por senderos donde sus fuentes son legítimas, confiables y afirmativas; significa que tiene un alto nivel de verdad. Por otro lado, Schultz señala que “hoy la gente absorbe y procesa información para comprender o manejar la mayoría de los temas. Para el

consumidor, la percepción es la verdad. Una percepción puede ser errónea, pero para el consumidor representa todo lo que necesita saber” (1997: 53).

Martini destaca dos tácticas discursivas: el sensacionalismo, y la hipérbole narrativa. El sensacionalismo tiene la función de abrumar al público con la noticia policial, exacerbando el azar ligado a lo cotidiano. Ejemplo de esto son las noticias relacionadas a secuestros, fusilamientos, violaciones, etc. También tiene el objetivo de alterar la vida cotidiana, y modificar el modo de vida individual, familiar, social, etc. Asimismo, se apoya en tres factores: identidad de la víctima, cercanía, y tiempo cronológico. De este modo, se obtiene que la víctima (persona común de clase media), asaltado y asesinado en la puerta de su casa (cercanía), a las doce del mediodía (horario pico) (2009). Gustavo Beade considera la intencionalidad por parte de los medios de seleccionar arbitrariamente las noticias. En este sentido, sostiene que:

“En general los periódicos y los programas de radio y televisión, toman arbitrariamente ciertos casos policiales y comienzan un tratamiento pormenorizado por varios días, hasta que súbitamente, cuando la investigación judicial pierde su grado de televisación, es abandonado tan rápidamente que resulta complejo quizás recordar de que trataba el caso en concreto” (2010: 60-61).

De esta manera, aparecen y desaparecen de escena, ciertas noticias policiales de acuerdo al enfoque mediático. Dentro de este contexto, Zaffaroni explica que en la actualidad la criminología no puede limitarse sólo al plano académico, es decir, procurar acercarse a la realidad social a través de un conocimiento perfeccionado (2011). En efecto, sostiene el autor, debe ocuparse de la construcción de la realidad llevada a cabo por los medios de comunicación. A tal punto que, es a ésta criminología mediática a la que accede el grueso del público; como así también es la que se le suministra al común de la sociedad. Por otro lado, es la criminología que el discurso único de medios impone a los políticos (*Ibídem*).

Desde otra mirada, Paul Lazarsfeld y Robert Merton destacan la magnitud en la que los medios intentan adaptar al público al status quo social y económico; pues sucede lo mismo con la información respecto a los hechos delictivos proveniente de dudosas fuentes (1977). En este punto, el objetivo principal de los medios de comunicación es adaptar al público al miedo que se genere una vez ofrecida una información en demasía y elegida.

Asimismo explican los autores, que “la función actual de los medios masivos de comunicación se limita en gran medida a preocupaciones sociales periféricas y por ende no exhiben el grado de poderío que se les atribuye habitualmente” (*Ibídem*: 14). De esto resulta que a mayor gravedad de la noticia, mayor es la sensación de inseguridad provocada.

3.5. La naturalización mediática de la muerte del “otro” delincuente.

En el trabajo de Mercedes Calzado, la autora explica que su investigación consiste en reflexionar sobre las modalidades que utilizan los medios de comunicación respecto a las noticias policiales relacionadas a las muertes de delincuentes en situación de enfrentamientos con efectivos de la Policía Federal Argentina (2009). Para tal fin, la autora realizó un análisis cualitativo basado en entrevistas a periodistas encargados de las secciones policiales con motivo de poder evaluar sus características y qué toman en cuenta a la hora de publicar una noticia.

Como herramienta para dicha investigación, la autora se apoyó en el análisis de dos medios gráficos conocidos: *Clarín* y *Crónica*, abarcando el período comprendido en el primer semestre de 2004; por otro lado, para comprender los artículos en profundidad como también su contenido, se aprecian entrevistas a redactores de secciones policiales de las agencias DYN y Télam. En este sentido, cuando ocurre un enfrentamiento y muere un delincuente, los medios se guiarán en el marco de datos concretos: delito-enfrentamiento-delincuente muerto (*Ibídem*).

Por otro lado, los medios tienen el poder de controlar las acciones del gobierno, como así también las opiniones públicas y sus reacciones. Dentro de este contexto, Calzado refiere que “dan cuenta de la ‘opinión pública’ entendida como el modo de mostrar de forma transparente aquello que la mayoría piensa, opina” (*Ibídem*: 55). El objetivo de esta postura es transmitir datos y hechos concretos que llamen la atención del público a quien va dirigido. En relación a la responsabilidad que pudiera corresponderles a los medios de comunicación, Beade refiere que:

“Es posible señalar la escasa reflexividad respecto del rol que detentan y la posibilidad de generar temor. Así, los responsables de los medios de comunicación señalan que tienen el “deber” de mostrar lo que pasa fiscalizando la acción del Estado en la materia sin ninguna otra responsabilidad que pueda endilgárseles” (2010: 62).

De esta manera, el discurso periodístico surge como una voz desde la que los sujetos se conectan con las realidades a las cuales no pueden acceder directamente. Así, la información distorsionada viene a convertirse en un problema de la construcción de lo público. En este marco, la forma y el modo en que se relatan los hechos sobre delincuentes muertos en enfrentamientos, da cuenta de cómo se permite a la noticia posicionarse como reflejo de lo *real*; donde las características y modos de inclusión y exclusión de los abatidos, se debaten sobre la legitimidad de su muerte (Calzado, 2009).

Con respecto al análisis de los dos medios gráficos *Clarín* y *Crónica*, Calzado explica que el primero se presenta como un diario serio y el segundo como un diario sensacionalista. El periodismo sensacionalista obtura intencionalmente la racionalización de los tabúes de los espacios públicos por parte de la audiencia. *Crónica*, utiliza el sensacionalismo para darle vida a la desviación del delincuente y a la función represiva del crimen de la labor policial. Otro punto importante en el relevamiento de investigación de la autora, es el origen de las noticias. Para ello, realiza un análisis de los resultados de las entrevistas con redactores y periodistas de los medios estudiados. En base a estos resultados se establece que los datos obtenidos provienen de las siguientes fuentes: Agencias de noticias (esta es la fuente privilegiada de información con la que trabajan los diarios), llamadas de la institución policial, ronda de llamadas del diario a las comisarías; canales de noticias, periodistas acreditados, llamadas a la morgue judicial, y otros contactos (*Ibídem*).

Del análisis de la totalidad de los artículos periodísticos relevados por la autora, surge que entre *Clarín* y *Crónica* no existen grandes diferencias respecto al uso de las fuentes; y en la mayoría de los casos se apelan a unicidad de fuente, la policial. Un aspecto llamativo en la composición de las noticias que suministran los periodistas, es que casi nunca se cita fuentes procedentes de familiares, amigos, o vecinos del delincuente. Esto también se observa en la ausencia de fuente judicial en la información, lo que atañe luego una determinación de la justicia en la causa sobre enfrentamientos. En este sentido solamente en circunstancias especiales, la información que se suministra procede de un testigo o de algún medio ajeno a la voz oficial.

Dentro de este contexto, los medios de comunicación son empresas que tienen como objetivo principal el lucro económico; y para ello deben vender a sus lectores ciertas preferencias sobre sus artículos de consumo. Otro dato importante es la exclusividad que se

disputan los medios, y el querer *llevar la bandera* sobre algunos casos. La prioridad de un hecho violento, es motivo de disponibilidad inmediata en la publicación de la noticia.

Además de todos estos factores, surge la cuestión de la visibilización de las muertes, lo que da curso a una información noticiable. Es interesante remarcar también, la deshumanización que la difusión informativa ejerce sobre el delincuente. En este sentido, la cuestión es referir la muerte de un delincuente en un enfrentamiento con la policía, otorgándole una dimensión impactante y espectacular para enriquecer el relato de la noticia. En este apartado, se toma en cuenta las características singulares de los delincuentes (si son famosos, despreciables, si el delincuente resulta ser policía, etc.). Estas características le otorgan mayor impacto a la noticia, y por ende mayor visibilidad.

3.6. Los medios de comunicación y su influencia en el reclamo punitivo de la opinión pública.

Los medios ejercen varias funciones sobre la seguridad (aconsejan, moralizan, se apoyan del lado de la víctima). Sin embargo, muchas veces se colocan en un plano judicial que no les corresponde, ya que no imparten seguridad ni justicia como así tampoco las puede garantizar. En relación al plano represivo, la información que ofrecen los medios se convierte en oficial, unilateral y formalista, mezclado con lenguaje militarista y estereotipado (Rey, 2008).

Siguiendo esta línea, es una constante que casi a continuación de un hecho delictivo grave amplificado por los medios de comunicación, se toman en consideración las manifestaciones de las víctimas y se generan encuestas en base a una sola pregunta y una respuesta afirmativa o negativa, como por ejemplo: “¿está de acuerdo con la libertad condicional?” (Beade, 2010: 56). Cuando los medios conceden primacía a lo personal frente a lo impersonal, a los nombres por sobre las cosas, a los actores por sobre los actos (Lapham, 1996), colaboran en la edificación de un espacio público de características menos reflexivas y más emocionales (Debray, 1995).

Los medios de comunicación cumplen un papel importante en cuanto al planteo de políticas de seguridad, proponiendo políticas de prevención. Sin embargo, dicha función le corresponde a la policía y a los ministerios de seguridad. Pero cuando escuchamos la palabra de la opinión pública en cuanto a asuntos de seguridad, se observa una marcada tendencia de la gente de querer llevar a los delincuentes a la cárcel y a endurecer las penas. Esto conlleva a pasar de políticas de prevención a políticas punitivas (Rincón, 2008).

La visión distorsionada y selecta de las noticias violentas que muestran los medios, junto con el ya mencionado concepto de sensacionalismo, generan un comportamiento violento por parte de sus seguidores. En este sentido, Lorena Godoy e Irma Arriagada señalan que:

“La prensa, en general, tiende a destacar los hechos más violentos, ejerciendo un papel de denuncia del aumento de la violencia y de la inseguridad en los distintos países de América Latina...la violencia en los medios tendería a instigar el comportamiento violento produciendo un “efecto de imitación” en la audiencia”. (1999: 5-10).

Desde otra perspectiva, Jaume Curbet sostiene que los medios de comunicación juegan un doble papel: económico y político, y la opinión pública se apoya en ideas punitivas influenciadas por las agencias informativas (2009). Asimismo, el populismo punitivo se desentiende de la ley penal y busca apoyo en la opinión pública, especialmente de los medios de comunicación. En este sentido, Torrente da cuenta del miedo difuso que generan los medios de comunicación, como así también sobre el sentimiento de odio y el reclamo de medidas punitivas por parte de la población. Esto, es en razón de que mientras más sangriento es el hecho informado, mayor impacto produce en la sociedad (1998).

Desde otra perspectiva, Martini refiere que a los efectos de un miedo al delito suscitado por las agencias periodísticas, se le suma una serie de medidas adoptadas por la sociedad respecto a la preocupación por su seguridad. De esto, surge el pedido de mayor presencia policial hasta el reclamo de endurecimiento de las penas y la baja en la edad de imputabilidad. En una sociedad en la cual los medios toman demasiada influencia en la vida cotidiana, es posible que se conviertan en actores importantes en el plano político y económico; y además, construyen la actualidad mediática a la cual les otorgan credibilidad y legitimidad (2009).

4. CONCLUSIONES

Hablar de Derechos Humanos, implica también hablar de dignidad humana. Esta dignidad exige la necesidad de respetar la libertad, la igualdad sin distinciones raciales, de sexo, religión, pensamiento político ni de cualquier otra índole. De esta manera, los Derechos Humanos al ser inherentes a todas las personas, definen sus relaciones con el poder de un Estado, delimitándolo y exigiendo a la vez que éste último adopte las medidas que sean necesarias para garantizar el disfrute de todos los derechos a todas las personas.

Por otro lado, los Derechos Humanos tienen la función de excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida privada. Asimismo, abarcan la libertad, la participación, la solidaridad, el acceso, la inclusión, la equidad y justicia. Incluyen características propias de la inherencia de los mismos a las personas. Entre ellas, el Estado de Derecho, como se dijo en el primer capítulo de ésta tesis, refiere que el ejercicio del poder estatal debe sujetarse a reglas que comprendan los mecanismos para la protección y garantía de los Derechos Humanos.

De tal manera, se ha explicado también que existen otras características que forman parte de los derechos de las personas, como la Universalidad la cual indica que todas las personas son titulares de Derechos Humanos, y que en el caso que un Estado observe su violación en otro país, tiene el poder de intervenir a través de la comunidad internacional para impedirlo.

Se analizó el rol que desempeñan los medios de comunicación en la defensa o vulneración de los Derechos Humanos. Esto se explica según desde que perspectiva los medios informen ciertos hechos que consideren relevantes ya que ejercen una fuerte influencia en la opinión pública. En este sentido, si los medios de comunicación reproducen un relato basado en construcciones estereotipadas, estigmatizantes o discriminatoras respecto a un sector de la población o a una persona en particular, ese relato incidirá negativamente en la garantía y el respeto hacia los Derechos Humanos del sector en cuestión.

Sin embargo, se ha demostrado en el presente trabajo, que el tratamiento periodístico que cada medio de comunicación le otorgue a los Derechos Humanos obedece a intereses y políticas editoriales que se basan en la interrelación entre medios y actores de gobierno, fuerzas de seguridad, etc., lo que hace posible la inclusión de ciertos temas en la agenda mediática y la exclusión de otros, privilegiando ciertas fuentes en detrimento de

otras. En este punto, la libertad de expresión garantiza a las personas su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, como también el derecho a conocer opiniones, relatos y noticias. Este derecho, es imprescindible para el ejercicio pleno de otros derechos y los medios de comunicación son aliados de la comunidad en la vigilancia ante los abusos del Estado, utilizando la libertad de expresión para exponerlos.

Asimismo, la libertad de expresión tiene relación con otras garantías como el derecho a la igualdad, a la no discriminación y el principio de inocencia y debido proceso. Esto implica que los medios deban respetar las garantías de toda persona acusada de un delito y considerarla inocente hasta que la justicia demuestre lo contrario. Cuando una noticia informa sobre la detención de personas, comúnmente son expuestas en los medios de comunicación con una carga de culpabilidad previa, vulnerando así, el principio de presunción de inocencia.

Esto se vio reflejado en el análisis de los artículos periodísticos del segundo capítulo de la tesis, en los cuales se observa que cuando los medios de comunicación distribuyen estereotipos estigmatizadores en su relato, se produce un refuerzo de la exclusión social de los sectores criminalizados por su condición social los cuales son comúnmente sectores empobrecidos. De tal manera, esta exclusión va de la mano con la imagen negativa que los medios presentan a las audiencias.

En este marco, y de acuerdo con los artículos periodísticos analizados de los Diarios Clarín y Crónica se puede concluir que:

1. Clarín reproduce discursos basados en prejuicios discriminatorios respecto a la población extranjera y los sectores económicamente más vulnerables. Sumado a ello, visibiliza ciertos estigmas territoriales vinculando pobreza con delincuencia; construyendo y sosteniendo esa relación. Esta construcción, implica el señalamiento y percepción del “otro” como peligroso creando una diferencia con los sujetos “normales”.
2. En cuanto al discurso mediático respecto a la población extranjera, Clarín utiliza la nacionalidad de los inmigrantes implicados en una causa penal para colocarlos en una categoría social inferior a los cuales hay que castigar; denotándose así un estigma de clases. De esta manera, construye un encuadre de carácter negativo para hacer referencia a un “otro” extranjero

acusado de cometer un delito señalando que el inmigrante viene de afuera para delinquir.

3. El discurso de Clarín respecto a los extranjeros acusados de “criminales” funciona como una barrera para impedir su inclusión social, considerando al inmigrante en el relato de noticias policiales como un individuo de categoría social inferior que carece de derechos y merece ser excluido.
4. Otro punto a destacar respecto al relato de noticias policiales que produce Clarín, está vinculado al estigma territorial. Tal como se ha visto en alguno de los artículos analizados, en más de una ocasión se hace mención de la relación delincuencia-pobreza, adjudicando un estigma negativo a las villas en donde fueron detenidos los acusados de delitos. En este caso, los barrios más mencionados, fueron la villa 31 y la 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires. De tal forma; Clarín construye e instala un discurso sobre la peligrosidad de un barrio pobre como así también de sus habitantes atribuyéndoles culpabilidad y peligrosidad por el lugar donde viven de manera prejuiciosa. Este recorte que utiliza Clarín colabora en la reafirmación de pensamientos negativos en la opinión pública respecto a la pobreza y delincuencia.

Con respecto al análisis realizado de los artículos periodísticos del Diario Crónica se llega a las siguientes conclusiones:

1. Cuando Crónica habla de la detención de un extranjero acusado de la comisión de un delito, lo criminaliza desde esa condición. Esto se vio reflejado en más de un artículo en donde se menciona la detención de personas colombianas acusadas de narcos o motochorros. En este sentido, Crónica instala una serie de prejuicios, estereotipos y discursos discriminatorios hacia los “otros” extranjeros que son detenidos propagando así un sentimiento de xenofobia y discriminación en la audiencia y en la sociedad.
2. Por otro lado, el relato discriminatorio utilizado por Crónica, junto con la construcción de una imagen estereotipada del “otro” delincuente, funciona como mecanismo de exclusión social y afecta los derechos y garantías de las personas involucradas. Esto deviene luego, en cambios en las prácticas de

las autoridades estatales o modificaciones para limitar los derechos de estas personas acusadas de delitos, un ejemplo de ello, es la deportación de una mujer acusada de ser la madre de un clan narco, tal como se observó en el presente trabajo.

3. Crónica utiliza el morbo e imágenes impactantes para fomentar el espectáculo e infundir un riesgo percibido a la gente como real. De esta manera, el Diario utiliza la violencia y la catástrofe para sembrar emociones fuertes y fascinación en la audiencia para captar su atención. Este discurso sensacionalista que ofrece Crónica contribuye al incremento de la sensación de inseguridad frente al delito. Esto demuestra la poca sensibilidad y falta de respeto a la dignidad de las personas involucradas en un delito con la que Crónica relata la noticia policial.
4. Otro punto importante que se obtiene del relato policial de Crónica, es la forma descalificadora con la que describe a los presuntos imputados de un delito, señalándolos como “bestias, criminales” y remarcando también su nacionalidad. De este modo, se producirá un efecto negativo en la sociedad la cual reclamará medidas punitivas en virtud a la cantidad de noticias similares que reproducen la construcción del “otro” como delincuente afectando como se ha dicho anteriormente la presunción de inocencia para crear la presunción de culpabilidad.

De lo analizado, se puede decir que tanto Clarín como Crónica invisibilizan y naturalizan la muerte o detención de ese “otro” señalado como delincuente y sólo son visibilizados en clave de “delincuente”. Por otro lado, ambos Diarios trabajan en la construcción del “otro” incluyendo adjetivos totalmente descalificativos con tintes estigmatizantes respecto a quienes cometen delitos para fomentar la sensación de inseguridad en la población y obtener mayor audiencia o *rating*.

Sin embargo, el sentimiento de inseguridad no es proporcional al riesgo objetivo de victimización y su incremento resulta de la difusión de noticias policiales que producen los medios de comunicación los cuales fomentan el pánico y alarma social. Los medios contribuyen a la formación de una idea distorsionada de la violencia social lo que genera en la audiencia una percepción de que el crimen y el delito son mayores de lo que realmente son. Sumado a esto, la cuestión de la

inseguridad sólo pone su acento en un pequeño número de delitos que generan miedo al delito y pánico social dejando de lado delitos que afectan a una gran parte de la población como los denominados delitos de “cuello blanco”.

Pero a pesar de que los gobiernos o sistema penal ponen foco en un cierto número de delitos, según la Encuesta Nacional de Victimización de 2017 más del 85% de los hogares argentinos que forman parte de la muestra han adoptado alguna medida de seguridad para protegerse de la delincuencia y el mismo porcentaje de la población considera que la inseguridad delictiva es un problema bastante grave.

La sensación de inseguridad que construyen los discursos de los medios de comunicación, muchas veces conduce a prácticas penales respecto a un selectivo grupo social identificable el cual es estereotipado a través de los medios. Estas prácticas y relatos utilizados y amplificadas por los medios de comunicación son absorbidos por la opinión pública y las autoridades estatales, llevando a la reproducción de desigualdad social, dividiendo a las personas de “bien” de los “otros” diferentes. Así también, la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública en cuanto a la difusión de noticias relacionadas a hechos delictivos, produce una postura de reclamo de políticas de prevención, ya que los medios en su relato, elaboran teorías simplistas y extremistas para dar solución a los temas de inseguridad.

Es importante que los medios de comunicación sirvan como herramientas que incluyan la participación popular garantizando el respeto a los derechos de las personas, dejando de lado los intereses comerciales. Es decir, que los medios sirvan como articulación de otros derechos, ya que, si los medios son bien utilizados, se constituyen en instrumentos privilegiados para la protección de los Derechos Humanos.

Para ello, sería necesario que los periodistas o quienes trabajan en los medios de información, fomenten un periodismo con enfoque social, omitiendo tácticas discursivas como el sensacionalismo para la cobertura de noticias policiales, así como también evitar la distribución de noticias que incluyan un lenguaje estereotipado o estigmatizante para referirse a una persona imputada de cometer un delito o a un barrio en particular. En este sentido, el periodismo tiene que ser consciente de las consecuencias que el lenguaje estereotipado produce tanto

en el “otro” señalado como delincuente, como así también como en los demás miembros de la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

- ADASZCO, D. y KORNBLIT, A. L. *Xenofobia en adolescentes argentino, Un estudio sobre la intolerancia y la discriminación en jóvenes escolarizados*, Revista Mexicana de Sociología, 70 (1), 2008.
- APONTE SÁNCHEZ, Elida. *Fundamentación, naturaleza y universalidad de los derechos humanos, hoy*. Revista de Estudios de Genero. La Ventana, Guadalajara, 2002.
- ARRIAGADA, I., GODOY, L. *Seguridad ciudadana y violencia en America Latina: diagnostico y políticas en los años 90'*. Editorial Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1999.
- ARTESE, Matías. *Protesta social y discriminación Político-Ideológica en: Investigaciones por la Diversidad: Producción Científica sobre la Discriminación en la Argentina*. Instituto Nacional contra la Discriminación, La Xenofobia y El Racismo, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 2008.
- BEADE, Gustavo A. *El populismo penal y el derecho penal todoterreno en la Argentina*. Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. XXXI, N° 90, 2010.
- BOSTROM, Ann, Cynthia J. ATMAN, Batuch FICHHOFF y M. Granger MORGAN. *Evaluating risk Communications: Completing and correcting mental models of hazardous processes, part II*. Risk Analysis, 1994.
- CALVO, Néstor. *Aproximaciones conceptuales al principio de progresividad y no regresividad de los derechos constitucionales*. Revista Vis Iuris, N° 1, Vol. 1. Universidad Sergio Arboleda, Santa Marta, 2014.
- CALZADO, Mercedes. *Miedo y sensación térmica. Víctimas mediatizadas y bramidos de cambio penal*. Universidad Nacional de La Plata (en prensa), Buenos Aires, 2009.
- CARPIZO, Jorge. *Derechos Humanos y Ombudsman*. Comisión Nacional de los Derechos Humanos e Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1993.
- CARTECHINI, M. J. y RIVAS, G. *Inmigrantes, trabajadores, bolivianos. La representación del otro cultural en la prensa gráfica*, en: Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 Temas de Patrimonio Cultural: Buenos Aires Boliviana.

Migración, construcciones identitarias y memoria. Next Print, Buenos Aires, 2009.

- CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES. *Informe sobre la Argentina. Situación de los derechos humanos de las personas migrantes*, 2016, documento web: <https://www.cels.org.ar/common/file/InformeDerechosMigrantes.pdf>, consultado el: 14/10/2019.
- COLOMBO, Jorge A. *Pobreza y desarrollo infantil “Una contribución multidisciplinaria”*, Editorial Paidós Tramas Sociales, Buenos Aires, 2007.
- COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Opinión Consultiva 5/85 sobre la colegiación obligatoria de periodistas, 13 de noviembre de 1985.
- COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, “Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”, documento web: <https://www.cidh.org/relatoria>, consultado fecha: 07/10/2019.
- CORNEJO, Catalina. “*Estigma territorial como forma de violencia barrial*”. Revista Invi. V. 27, nº 76: 2012.
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 2 de julio de 2004.
- CURBET, Jaume. *El Rey desnudo. La gobernabilidad de la seguridad ciudadana*. Editorial UOC, Barcelona, 2009.
- D’ADAMO, Orlando, FREIDENBERG, Flavia y GARCÍA BEAUDOUX, Virginia. *Medios de comunicación y Función del Establecimiento de la Agenda: un estudio empírico en Argentina*. América Latina Hoy, 2000.
- D’ADAMO, Orlando; GARCÍA BEAUDOUX, Virginia. *Tratamiento del delito y la violencia en la prensa. Sus posibles efectos sobre la opinión pública*. Fronteras Globales. Cultura, Política y Medios de Comunicación, Editorial La Crujía, Buenos Aires, 2007.
- DAGRÓN, Alfonso. *El Derecho a la Comunicación: articulador de los Derechos Humanos. Razón y Palabra*. Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación. www.razonypalabra.org.mx. México, 2012.

- DAMMERT, Lucia y MALONE Mary Fran. *Inseguridad y temor en la Argentina: el impacto de la confianza en la policía y la corrupción sobre la percepción ciudadana del crimen*. Instituto de Desarrollo Económico y Social, Vol. 42, N° 166, Buenos Aires, 2002.
- DAROQUI, Alcira. *Las seguridades perdidas. Argumentos*. Revista Electrónica de Ciencias Sociales, N° 1, Buenos Aires, 2003.
- DE ANDA JUÁREZ, Andrés I. *El respeto al Principio de Inocencia y los medios de comunicación en: Las victimas en el Sistema Penal Acusatorio*. USAID del Pueblo de los Estados Unidos de America. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2016.
- DEFENSA DEL PÚBLICO, *Guía para el tratamiento periodístico responsable de noticias policiales*, en: defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2016/10/Guia-Policiales-PDF-WEB-2019.pdf.
- DE LA O SOTO, José Guadalupe. *Practicas Judiciales*. Revista del Instituto Federal de Defensoría Pública, N° 22, México, 2016.
- DE PABLOS COELLO, José Manuel. *Amarillo en prensa*, Idea, Santa Cruz de Tenerife, 1997.
- ENTMAN, Robert. *Framing: Toward a clarification of a fractured paradigm*, Journal of Communication, vol. 43, n° 3, 1993.
- FAINBERG, Marcelo H. *La inseguridad ciudadana, violencia y criminalidad*. Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004.
- FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. *El sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos Institucionales y Procesales*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, C.R, 1996.
- FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. *Los límites de la Libertad de Expresión*. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004.
- FOUCAULT, M. *Las palabras y las cosas*. Curso en el College de France (1975-1976). Fondo de Cultura de Economía, Buenos Aires, 2008.

- FOUCAULT, Michel. *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión*. Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1975.
- FUNDACIÓN JUAN VIVES SURIÁ, *Derechos humanos: historia y conceptos básicos*. Editorial El perro y la rana, Caracas, 2010.
- GÁLVEZ, Javier Álvarez. *La representación mediática de la inmigración. Entre el encuadre y el estigma*. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº 80, España, 2009.
- GARCÍA SAN MIGUEL, L. *Estudios sobre el derecho a la intimidad*. Tecnos, Madrid, 1992.
- GERBNER, G. (1973). Cultural Indicators. The Third Voice. En: G. Gerbner, L. Gross, W. Melody (eds.), *Communications Technology and Social Policy*. New York: Wiley and Sons.
- GERBNER, G. y GROSS, L. (1976). Living with the television: the violence profile, *Journal of Communication*, 26 (2).
- GERBNER, G. y GROSS, L.; JACKSON-BEECK, M.; JEFFRIES-FOX, S. y SIGNORIELLI, N. (1978). Cultural indicators: violence profile N.º 9, *Journal of Communication*, 28 (3).
- GERBNER, G.; GROSS, L.; MORGAN, M. y SIGNORELLI, N. (1980). The “mainstreaming” of America: violence profile N.º 1, *Journal of Communication*, 30 (3).
- GERBNER, G.; GROSS, L.; MORGAN, M. y SIGNORELLI, N. (1986) Living with the television: The dynamics of the cultivation process. En: J. Bryant, D. Zillman (eds.), *Perspectives on media effects*. Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum.
- GHERARDI, Natalia. *Otras formas de violencia contra las mujeres que reconocer, nombrar y visibilizar*. Serie Asuntos de Género. CEPAL, Santiago, 2016.
- GIL CALVO, Enrique. *El miedo es el mensaje. Riesgo, incertidumbre y medios de comunicación*, Alianza Editorial, Madrid, 2003.
- GOFFMAN, Erving. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Prentice Hall, London, 1963.
- GOFFMAN, Erving. *Estigma, la identidad deteriorada*, Amorrortu, Buenos Aires, 2008.

- GONZÁLEZ PÉREZ, Luis Raúl. *Los Derechos Humanos y el Periodismo*. Conferencia del con motivo del 66 Aniversario de la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García”, México, 2015.
- GUERRERO, Manuel Alejandro. *Medios de comunicación y la función de transparencia*. Cuadernos de transparencia, número 11. IFAI, México, 2006.
- HENER, Alejandro. “*Moralidad de clase media y toma de posición frente al riesgo delictivo*”. Ponencia presentada en la VIII Reunión de Antropología del Mercosur (RAM). Universidad Nacional de General San Martín: Buenos Aires, Argentina, 29 de septiembre al 2 de octubre, 2009.
- INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. *Manual de Derechos Humanos para Comunicadores y Comunicadoras*. Alvimpress Impresores Ltda. Santiago de Chile, 2016.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, *Encuesta Nacional de Victimización 2017*. 1º Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2018.
- KESSLER, Gabriel. *El sentimiento de inseguridad*. Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2009.
- KESSLER, Gabriel. *Sociología del delito amateur*. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2006.
- LAPHAM, L. *El ahora eterno*. Prólogo a la edición de la MIT Press del año 1994 de: M. McLuhan, *Comprender los medios de comunicación*, Paidós, Barcelona, 1996.
- LASZARFELD, Paul y MERTON, Robert. *Comunicación de masas, gusto popular y acción social organizada*. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1977.
- LINK, B y PHELAN, J. *Conceptualizing stigma*, Annual Review Sociology, vol. 27, New York, 2001.
- MARTÍNEZ SAMPERE, Eva. *La universalidad de los derechos humanos*. Revista de Filosofía N° 39. Thémata, Sevilla, 2007.
- MARTINI, Stella. *La irrupción del delito en la vida cotidiana. Relatos de la comunicación política*. Editorial Biblos Sociedad, Buenos Aires, 2009.

- MASCOTT SANCHEZ, María de los Ángeles. *Seguridad Pública, incidencia delictiva y sensación de inseguridad*. Centro de Estudios Sociales y opinión pública, México, 2002.
- McLEOD, J.; KOSICKI, G. y McLEOD, D. *Expansión de los efectos de la comunicación política*. En: J. Bryant y D. Zillman (Eds.), *Los efectos de los medios de comunicación*. Editorial Paidós, Barcelona, 1996.
- MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, *Investigaciones por la diversidad, Producción Científica sobre la Discriminación en la Argentina*, Editorial INADI, 2008.
- MOLERO NAREDO, María (2001). *Seguridad urbana y miedo al crimen*. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, año/Vol. 1, N° 002. Santiago de Chile, 2001.
- MONTERA, C. “*Discursos de exclusión, Aproximaciones al proceso de construcción simbólica de los migrantes en la prensa nacional*”, en: Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 24 Temas de Patrimonio Cultural: Buenos Aires Boliviana. Migración, construcciones identitarias y memoria. Next Print. Buenos Aires, 2009.
- MORALES, Susana. *Medios de comunicación y sentimiento de inseguridad: un recorrido por sus abordajes y nuevas preguntas*. Delito y Sociedad n° 37, año 23, 1° semestre, 2014.
- NACIONES UNIDAS, *Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado. Manual para Parlamentarios N° 26*, Courand et Associés, Ginebra, 2016.
- NACIONES UNIDAS: “¿Qué es el Estado de Derecho?”, documento web: <https://un.org/ruleoflaw/es/what-is-the-rule-of-law/>, consultado fecha 05/10/2019
- NADDEO, María Elena en COLOMBO, Jorge A. *Pobreza y desarrollo infantil “Una contribución multidisciplinaria”*, Editorial Paidós Tramas Sociales, Buenos Aires, 2007.
- NIKKEN, Pedro. *El Concepto de los Derechos Humanos*. Volumen colectivo *Estudios Básicos de Derechos Humanos – Tomo I*, Edit. (IIDH), San José, Costa Rica, 1994.

- NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. *Teoría y dogmática de los derechos fundamentales*. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003.
- ORTIZ SORIANO, Agustina. *De la importancia de la universalidad de los Derechos humanos, en la participación ciudadana*, Red española de la Filosofía, Madrid, 2017.
- PEGORARO, Juan S. *El síndrome de Aladino y el problema de la inseguridad*. Delito y sociedad, Revista de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Litoral, Año 9, N° 14. Buenos Aires-Santa Fe, Argentina, 2000.
- PEREZ LUÑO, A.E. *Delimitación conceptual de los Derechos Humanos en la obra colectiva: Los Derechos Humanos. Significación, estatuto jurídico y sistema*. Sevilla, España: Ediciones de la Universidad de Sevilla, 1979.
- PICARD DE ORSINI, Marie; USECHE, Judith. *El principio de progresividad y la actuación de los órganos del Poder Público conforme a la Constitución vigente*. Provincia, Mérida, 2005.
- POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA JUVENIL (POLJUVE). *Violencia Juvenil, Maras y Pandillas en Guatemala: Informe para la Discusión*, Guatemala, 2009.
- POSSO-SERRANO, Abelardo; POSSO SERRANO, Alberto. *Los derechos humanos y los medios de comunicación público en América Latina*. Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, N° 29 (julio-septiembre de 2015).
- PRADO, Juan José. *Derechos Humanos, conceptos introductorios para su estudio*. Oficina de publicación del CBC. Buenos Aires, 1997.
- QUINTANA ROLDÁN, Carlos F y SABIDO PENICHE, Norma D. *Derechos Humanos*, Porrúa, México, 2009.
- RAMONET, Ignacio. *La tiranía de la comunicación*. Editorial Debate, Madrid, 1986.
- REGUILLO, Rossana. *Derechos Humanos y Comunicación. Un malestar invisible*. Revista Latinoamericana de Comunicación, Chasqui. CIESPAL, Quito, 1998.
- RESTREPO, Javier Darío; HERRÁN, M. Teresa. *Ética para periodistas*. TM Editores, Bogotá, 1995.

- REY, Germán. *La relación seguridad ciudadana y medios de comunicación*. Cuadernos de Seguridad, N° 7, Buenos Aires, 2008.
- RINCON, Omar. *Medios y miedos...de la comunicación*, en: Cuadernos de Seguridad, Secretaria de Seguridad de la Nación, N° 7, Buenos Aires, 2008.
- RODRÍGUEZ ABANCÉNS, Marisa. *Medios de comunicación y derechos humanos: Los hechos y los derechos*. Miscelánea Comillas, Vol. 67, N° 130. Revista de Ciencias Humanas y Sociales, Madrid, 2009.
- RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, F. *Lenguajes y discriminación racial, En torno a la negritud*. Especulo, Revista de Estudios Literarios (24), Universidad Complutense se Madrid, Madrid, 2003.
- RODRÍGUEZ ZEPEDA, Jesús, *Un marco teórico para la Discriminación*, Colección Estudios número 2, 2006, México.
- RUBIO FERRERES, J.M. *Opinión Pública y medios de comunicación. Teoría de la agenda setting*, Gazeta de Antropología, 25 (1), Universidad de Granada, 2009.
- RUÍZ JIMÉNEZ, Joaquín, citado en: *Aproximación epistemológica a los derechos humanos*, Buenos Aires, 1984.
- SAR, Ariel. *La construcción mediática de los inmigrantes en Iberoamérica*. Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, vol. 3, España, 2015.
- SCHNEIDER, H. J. *La criminalidad en los medios de comunicación de masas*, en CPCr, 1988.
- SCHULTZ, Don, E. *Comunicaciones de Marketing integradas*. Editorial Granica, Buenos Aire, 1997.
- SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, *Programa Especial para el Fomento de la Cultura Democrática*, Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Ejecutivo Federal, México, 2001.
- SIBRIAN, Nairbis. *Medios de comunicación, violencia delictiva y estigma territorial en Venezuela*. Anagramas, Universidad de Medellín. Medellín, 2015.

- SIERRA CABALLERO, F., BARRAGÁN ROBLES V.; MORENO GÁLVEZ, J.
Derechos Humanos, comunicación y luchas por la dignidad. Ciespal, Quito, 2018.
- TORRENTE, Diego. *La calle del riesgo*. Actas del VI Congreso español de Sociología, La Coruña, España, 1998.
- TUVILLA, José, *Derechos Humanos y medios de comunicación*: Revista Comunicar, N° 9, España, 1997.
- UNESCO, “*Libertad de Expresión*”, documento web: <https://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-informacion/libertad-de-expresion/>, consultado fecha 05/10/2019.
- VAN DIJK, T. A. “*Discurso, poder y cognición social*”, Cuadernos, N° 2, año 2, 1994.
- VARELA, Cecilia Inés. *Mujeres, mirada masculina y espacio público. Exploraciones sobre la cuestión de la sensación de inseguridad, en adultas mayores en la Ciudad de Buenos Aires*. Buenos Aires, 2006.
- WACQUANT, L. *La estigmatización territorial en la edad de la marginalidad avanzada*. En Renglones, revista arbitrada en ciencias sociales y humanidades, núm.60. ITESO, Jalisco, 2009.
- WARR, Mark. En Rosemary Barberet y Jesús Barquín: *Justicia Penal Siglo XXI: Una selección de Criminal Justice 2000. El miedo al delito de EE.UU.: líneas para la investigación y la formulación de políticas*. Editorial Comares, España, 2000.
- WIEVIORKA, Michel. *El espacio del racismo*. Paidós, España, 1992.
- WOLF, Mauro. *La investigación de la Comunicación de Masas. Crítica y perspectivas*, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1987.
- ZAFFARONI, Eugenio Raúl. *La cuestión criminal*. Editorial Planeta, Buenos Aires, 2012.
- ZAFFARONI, Eugenio Raúl. *La palabra de los muertos, conferencias de criminología cautelar*. Editorial Ediar, Buenos Aires, 2011.
- ZÚNIGA, T. *Violencia simbólica en los medios de comunicación: los casos de violencia intra familiar y la cobertura de la prensa escrita costarricense*. Medicina Legal de Costa Rica, Vol. 18 (2), Heredia, 2001.

Artículos periodísticos:

- Clarín, 23-8-2018: “Retiro. Cuales son los grupos narcos que se disputan el poder en las villas 31 y 31 bis”. https://www.clarin.com/policiales/desbarataron-banda-narco-operaba-villa-31_0_IDMfSeIbe.html, consultado: 10-10-2019.
- Clarín, 25-3-2019: “Operación Wi-Fi, cayo la mayor banda narco del sur porteño con una tonelada de marihuana”. https://www.clarin.com/policiales/cayo-mayor-banda-narco-sur-porteno-tonelada-marihuana_0_X9oCsD7Eh.html, consultado: 10-10-2019.
- Clarín, 16-6-2019: “La enviaron a Lima, Perú. Echaron del país a la madre de un clan narco de la villa 31”. https://www.clarin.com/policiales/echaron-pais-madre-clan-narco-villa-31-bis_0_URiZeABaE.html, consultado: 10-10-2019.
- Clarín, 20-7-2019: “Desbarataron una banda narco que operaba en la villa 31”. https://www.clarin.com/policiales/desbarataron-banda-narco-operaba-villa-31_0_IDMfSeIbe.html, consultado: 10-10-2019.
- Clarín, 9-10-2019: “Operación Bachata. Acusados de narcos, los dominicanos se defienden: el Trap de la cárcel y un maletín con dólares de utilería”. https://www.clarin.com/policiales/acusados-narcos-dominicanos-defienden-trap-carcel-maletin-dolares-utileria_0_89EQdLcD.html, consultado: 10-10-2019.
- Crónica, 21-2-2019: “Cayó banda de colombianos por vender “coca” en una mueblería”. <https://www.cronica.com.ar/policiales/Cayo-banda-de-colombianos-por-vender-coca-en-una-muebleria-20190221-0065.html>, consultado: 11-10-2019.
- Crónica: 9-6-2019: “Colombiano motochorro fue detenido en Recoleta por robo a dos mujeres”. <https://diariocronica.com.ar/581046-colombiano-motochorro-fue-detenido-en-recoleta-por-robo-a-dos-mujeres.html>, consultado: 11-10-2019.
- Crónica, 10-10-2019: “Impactantes detalles de la autopsia a la joven hallada en cámara séptica”. <https://www.cronica.com.ar/policiales/Impactantes-detalles-de-la-autopsia-a-la-joven-hallada-en-camara-septica-20191010-0045.html>, consultado: 12-10-2019.

- Crónica, 4-10-2019: “Caen bestias que asesinaron, mutilaron y le sacaron los ojos a joven gay”. <https://www.cronica.com.ar/policiales/Caen-bestias-que-asesinaron-mutilaron-y-le-sacaron-los-ojos-a-joven-gay-20191004-0101.html>, consultado: 13-10-2019.
- Crónica, 7-10-2019: “Condenaron a 12 años a camionero que atropelló y mató a un piquetero”. <https://www.cronica.com.ar/policiales/Condenaron-a-12-anos-a-camionero-que-atropello-mato-a-un-piquetero-20191007-0036.html>, consultado: 12-10-2019.